México, D.F., 22 de abril de 2015.

Versión Estenográfica de la Sesión Pública Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, llevada a cabo en el Salón del Pleno del IFAI.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muy buenos días.

Siendo las once horas efectivamente con seis minutos de hoy, miércoles 22 de abril de 2015, con fundamento en el Artículo 11 del Reglamento Interior de este Instituto así como el numeral 2 de la Regla Décima Segunda de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en virtud que la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora se encuentra atendiendo una comisión oficial internacional, seré yo quien -con la venia de mis compañeros colegas- presida esta Sesión o más bien, diría yo, conduzca, haría la conducción de esta Sesión, por lo cual doy el más respetuoso reconocimiento a la presencia de mis compañeras y compañeros que se encuentran presentes y a todas las personas que nos acompañan en la presente Sesión.

Así pues solicito al Secretario Técnico del Pleno que verifique si existe quórum para la celebración de la Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto y a la cual se ha convocado.

Por favor, Secretario Técnico.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Larios Meneses: Con gusto, Comisionado Acuña.

En primer lugar, se da cuenta de la ausencia de los Comisionados Ximena Puente de la Mora, Oscar Mauricio Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepov, en virtud de su participación en la Conferencia Internacional de Comisionados de Información y en el Noveno Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, mismos que tienen lugar en la ciudad de Santiago, República de Chile,

del 21 al 24 de abril de 2015, conforme a lo aprobado por este Pleno, mediante Acuerdo de fecha 8 de abril de 2015.

En ese sentido, le informo que están presentes los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez.

Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar, de conformidad con el Artículo 9 del Reglamento Interior del Instituto.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Secretario Técnico.

En virtud de que existe quórum, se declara abierta la Sesión.

Señores Comisionados, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden del Día de esta Sesión.

Secretario Técnico, por favor sírvase dar lectura al Orden del Día.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Larios Meneses: Con gusto, Comisionado Acuña.

El Orden del Día para la presente Sesión es el siguiente:

- 1.- Aprobación del Orden del Día, Inclusión de Asuntos Generales en su caso.
- 2.- Aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos celebrada el 15 de abril de 2015.
- 3.- Discusión y en su caso Aprobación de los medios de impugnación interpuestos y que presentan los Comisionados Ponentes.
- 4.- Asuntos Generales.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Secretario Técnico.

Someto a su consideración, Comisionadas y Comisionado, el Orden del Día y les pregunto si tienen algún Asunto General que deseen incluir para esta Sesión.

De no haber comentarios, solicito al Secretario Técnico que por favor tome la votación correspondiente.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Larios Meneses: Con gusto, Comisionado.

Se somete a consideración de las Comisionadas y Comisionados del Orden del Día para la presente Sesión, por lo cual les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionado Areli Cano Guadiana:

Comisionada Areli Cano Guadiana: A favor.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Lara Meneses: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Lara Meneses: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Lara Meneses: Comisionado Acuña Llamas.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: A favor.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Lara Meneses: En ese sentido, le informo que queda aprobado por unanimidad el orden del día para la presente sesión y que no se agregaron asuntos adicionales por parte de los comisionados.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Secretario Técnico.

En desahogo del punto segundo del orden del día, someto a su consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos del 15 de abril de 2015.

Si existe alguna intervención de los señores comisionados al respecto, por favor.

Y si no la hay, Secretario Técnico, por favor, tome la votación correspondiente.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Lara Meneses: Conforme a su instrucción, comisionado, se somete a consideración de las comisionadas y comisionados el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos del 15 de abril de 2015, con los cometarios que se recibieron previo a esta sesión.

Por lo cual les solicito que sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionada Cano.

Comisionada Areli Cano Guadiana: A favor.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Lara Meneses: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Lara Meneses: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Lara Meneses: Comisionado Acuña.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: A favor.

Secretario Técnico Jesús Leonardo Lara Meneses: En ese sentido, queda aprobado por unanimidad el acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos celebrada el 15 de abril de 2015.

Es cuanto, comisionado.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias, Secretario Técnico.

En desahogo del tercer punto del orden del día, solicito ahora a Gustavo Parra, Coordinador de Protección de Datos Personales, que por favor dé lectura de los asuntos que en esta materia serán votados en la presente sesión.

Coordinador de Protección de Datos Personales Luis Gustavo Parra Noriega: Gracias.

Conforme a su instrucción, Comisionado Acuña, en primer lugar doy cuenta de que para la presente sesión se registraron 12 proyectos de resolución de recursos de revisión que son presentados por parte de los comisionados ponentes a este Pleno dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la interposición del recurso, de conformidad con la fracción I, del Artículo 55, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En segundo lugar, doy cuenta de cinco proyectos de resolución en los que se propone tener por no presentados sobreseer y/o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, así como un proyecto de resolución en el que se propone desechar por extemporáneo, que se encuentran enlistados en los numerales 3.5 y 3.6 del orden del día aprobado para esta sesión.

En tercer orden, doy cuenta de una solicitud de recurso de revisión que para su resolución requiere que el comisionado ponente disponga

de todas las facultades contenidas en los artículos 17 y 55 de la ley y sus correlativos al Reglamento.

En cuarto término, procedo a dar lectura de los números de expediente de los proyectos de resolución de recursos de revisión de fondo que se someten a votación del Pleno para la presente sesión, mismos que se identifican con las siglas RPD.

En los asuntos que a continuación se les da lectura, los proyectos proponen modificar la respuesta de la autoridad obligada, se trata del 0170/15 contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Comisionada Cano y el 0241/15 contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Comisionada Kurczyn.

Enseguida, doy cuenta de los proyectos de resolución cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta de los sujetos obligados, son contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 0191/15 de la Comisionada Cano; el 0226/14 bis, del Comisionado Acuña; y el 0272/2015, del Comisionado Salas.

Finalmente, doy cuenta del siguiente proyecto de resolución cuyo sentido propuesto es ordenar al sujeto obligado a proporcionar respuesta que conforme a derecho corresponda. Es el 0239/2015, contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Comisionada Cano.

Es cuanto.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Coordinador Parra.

Están a su consideración los proyectos de resolución. Señoras Comisionadas, señor Comisionado.

De no haber comentarios, como todo parece, pido al Coordinador de Protección de Datos Personales que sea tan amable de tomar la votación de los asuntos.

Coordinador de Protección de Datos Personales Luis Gustavo Parra Noriega: Conforme a su instrucción, Comisionado Acuña, están

a su consideración los proyectos de resolución de recurso de revisión de fondo que suman un total de seis, de los cuales dos de ellos proponen modificar; tres cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta del sujeto obligado respectivo; y uno en el que se ordena dar respuesta.

Los cinco proyectos de resolución en los que se propone tener por no presentados, sobreseer y/o desechar por causas distintas a la extemporaneidad; un proyecto de resolución en el que se propone desechar por extemporáneo, y una solicitud de recurso de revisión que para su resolución requiere que el Comisionado ponente disponga de todas las facultades contenidas en los artículos 17 y 55 de la Ley y sus correlativos del Reglamento, por lo que solicito a las señoras y señores Comisionados, sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Comisionada Cano.

Comisionada Areli Cano Guadiana: A favor de los proyectos.

Coordinador de Protección de Datos Personales Luis Gustavo Parra Noriega: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Coordinador de Protección de Datos Personales Luis Gustavo Parra Noriega: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Coordinador de Protección de Datos Personales Luis Gustavo Parra Noriega: Comisionado Acuña.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña Llamas: A favor de los proyectos.

Coordinador de Protección de Datos Personales Luis Gustavo Parra Noriega: De esta manera se aprueban por unanimidad de los presentes, las resoluciones anteriormente relacionadas.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Coordinador Parra.

Pasamos ahora a los asuntos en materia de acceso a la información, por lo que solicito atentamente a la licenciada Rosa María Bárcena, Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información, en ausencia del Coordinador de Acceso a la Información que dé lectura de los asuntos que serán votados en la presente Sesión.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Sí, Comisionado.

En primer lugar doy cuenta de que se registraron 74 proyectos de resolución que fueron presentados por parte de los Comisionados ponentes a este Pleno, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la interposición del recurso, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En segundo término, doy cuenta de un procedimiento de verificación de respuesta, por falta de respuesta.

A continuación, en tercer orden, doy cuenta de cuatro acuerdos de ampliación para resolución de recursos de revisión que son presentados con fundamento en lo establecido en el artículo 55, fracciones I y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En cuarto lugar, doy cuenta a este Pleno de los 18 proyectos de resolución en los que se propone tener por no presentados, sobreseer y/o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, de los cuales 11 de ellos corresponden a sobreseimientos por actualizar la causal prevista en la fracción IV, del artículo 58 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como seis proyectos de resolución en los que se propone desechar por extemporáneos que se encuentran enlistados en los numerales 3.5 y 3.6 del Orden del Día aprobado para esta sesión.

En quinto orden doy cuenta de dos solicitudes de recurso de revisión, que para su resolución requieren que el Comisionado ponente, disponga de todas las facultades contenidas en los artículos 17 y 55 de la Ley y sus correlativos del reglamento.

En sexto lugar, procedo a dar lectura de los números de expediente de los proyectos de resolución de recursos de revisión de fondo, que se someten a votación del Pleno para la presente sesión, mismos que se identifican con las siglas RDA y todos son del 2015.

En los siguientes proyectos que leeré, todos proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado: 610, interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública, del Comisionado Acuña.

1044, de Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, del Comisionado Acuña.

1233, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Comisionado Acuña.

1317, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Comisionado Acuña.

1339, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisionada Cano.

1346, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Comisionada Cano.

1414, de Presidencia de la República, del Comisionado Salas.

1428, del Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica, del Comisionado Salas.

En los asuntos que a continuación daré lectura, los proyectos proponen modificar la respuesta a la autoridad obligada, también todos son de 2015.

1149, de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, de la Comisionada Cano.

688, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de la Comisionada Cano.

869, del Servicio de Administración Tributaria, del Comisionado Acuña.

1009, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Comisionado Acuña.

1149, de la Secretaría de la Función Pública, del Comisionado Acuña.

1163, de la Secretaría de Educación Pública, del Comisionado Acuña.

1169, de la Procuraduría General de la República, del Comisionado Salas.

1187, de la Secretaría de la Función Pública, de la Comisionada Kurczyn.

1198, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del Comisionado Acuña.

1212, de Nacional Financiera, del Comisionado Acuña.

1213, de Petróleos Mexicanos, de la Comisionada Cano.

1236, de la Procuraduría General de la República, de la Comisionada Kurczyn.

1239, de Comisión Nacional del Agua, del Comisionado Salas.

1240, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Comisionado Acuña.

1262, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Comisionada Cano.

1306, de Comisión Nacional Forestal, de la Comisionada Kurczyn.

1313, de Petróleos Mexicanos, de la Comisionada Kurczyn.

1320, de la Secretaría de Educación Pública, de la Comisionada Kurczyn.

1327, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Comisionada Kurczyn.

1351, del Instituto Politécnico Nacional, del Comisionado Salas.

1352, de PEMEX-Exploración y Producción, del Comisionado Acuña.

1367, de Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, de la Comisionada Cano.

1374, del instituto Politécnico Nacional, de la Comisionada Cano.

1386, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, del Comisionado Salas.

1393, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Comisionado Salas.

1397, de la Secretaría de Educación Pública, de la Comisionada Kurczyn.

El 1411, del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisionada Kurczyn.

Por último, señoras y señores Comisionados, doy cuenta de los Proyectos de Resolución cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta del Sujeto Obligado. Todos son del 2015:

Es una reconducción de Acceso a la Información de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de la Comisionada Kurczyn.

El 532, en contra del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del Comisionado Salas; el 536, de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisionada Kurczyn.

El 547, de la Comisión Federal de Electricidad, del Comisionado Acuña; el 589, de Pemex Gas y Petroquímica Básica, del Comisionado Acuña; el 729, del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Victoria Bicentenario”, del Comisionado Acuña.

El 778, del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Victoria Bicentenario”, del Comisionado Acuña; el 960, del Servicio de Administración Tributaria, del Comisionado Acuña.

El 1234, de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, de la Comisionada Cano; el 1257, de Petróleos Mexicanos, de la Comisionada Kurczyn.

El 1260, de la Secretaría de Salud, del Comisionado Salas; el 1281, del Instituto Nacional de Migración, del Comisionado Salas; el 1297, de la Secretaría de Educación Pública, de la Comisionada Cano.

El 1330, del Instituto Nacional de Migración, del Comisionado Salas; el 1344, de la Secretaría de Gobernación, del Comisionado Salas; el 1348, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisionada Kurczyn.

El 1365, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Comisionado Salas; el 1402, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisionada Cano.

Es cuanto, Comisionado Acuña.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Directora General Rosa María Bárcena.

Están a su consideración los Proyectos de Resolución, compañeros, si son tan amables.

Areli.

Comisionada Areli Cano Guadiana: Gracias.

Pediría, para efectos de su discusión y, en su caso, aprobación, en forma independiente el Recurso del Expediente RDA-149/15, en

contra del Banco Nacional de Obras y Servicios, BANOBRAS, por favor.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muy bien.

Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Sí, muchas gracias. En los mismos términos que la Comisionada Cano, solicito la separación del asunto RDA-1327, en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para su votación particular.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muy bien.

Comisionado Joel Salas Suárez.

Comisionado Joel Salas Suárez: Muy buenos días, compañeras y compañeros de Pleno. S

Señor Presidente en Funciones:

Pediría, por favor, que se pudiese exceptuar de la votación en lo general el Recurso con la clave RDA-0532/15 en contra del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para que una vez haber sido discutido en lo particular, lo podamos votar.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias.

Asimismo, aprovecho la ocasión para -de la misma manera- sumar mi consideración para el mismo tratamiento al Recurso de Revisión RDA-589/15, interpuesto en contra de Pemex Gas y Petroquímica Básica, para que se vote individualmente una vez que sea discutido.

De no haber asuntos adicionales, pido a la Directora General Bárcena que sea tan amable de tomar la votación del resto de los asuntos.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Conforme a su instrucción, Comisionado Acuña, habiendo separado estos cinco Proyectos que serán discutidos y votados en lo individual, están a su consideración los Proyectos de Resolución de Recursos de revisión de fondo, que suman un total de 53, de los cuales ocho de ellos proponen confirmar, en 27 la propuesta es modificar y 18 cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta del sujeto obligado, un procedimiento de verificación por falta de respuesta, cuatro acuerdos de ampliación, los 18 proyectos de resolución en los que se propone tener por no presentados sobreseer y/o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, los seis proyectos de resolución en los que se propone desechar por extemporáneo y dos solicitudes de recurso de revisión que para su resolución requieren que el comisionado ponente disponga de todas las facultades contenidas en los artículos 17 y 55 de la ley y sus correlativos del reglamento.

Por lo que solicito a las comisionadas y comisionados sean tan amables de expresar el sentido de su voto.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionada Cano.

Comisionado Areli Cano Guadiana: A favor de los proyectos.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionado Acuña.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: A favor de los proyectos.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: De esta manera se aprueban por unanimidad las resoluciones anteriormente relacionadas.

Es cuanto, comisionado.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Directora General Rosa María Bárcena.

A continuación procederemos a presentar y discutir los proyectos en estricto orden cronológico y después tomaremos la votación correspondiente.

Por tanto, solicito amablemente a la Comisionada Areli Cano Guadiana, que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA-149/15 interpuesto en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N. C., que somete a consideración de este Pleno.

Aprovechando el instante en retorno del Comisionado Salas, de los 54 asuntos de fondo, es interesante, en nueve de ellos proponemos confirmar la resolución, en 27 modificar y en 18 revocar la respuesta.

Lo cual es una tónica que en la estadística se viene siguiendo.

Ahora sí pues, Comisionada Cano, por favor.

Comisionado Areli Cano Guadiana: Gracias, Comisionado Acuña.

Muy buenos días a todas y todos.

En este caso se trata del recurso 149/15 en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios.

El particular requirió toda la información relacionada con el proyecto denominado "Monterrey Seis", estudios, dictámenes, solicitudes, oficios de gobierno del Estado de Nuevo León, autorización del proyecto por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como las comunicaciones que intervenga el sujeto obligado.

En respuesta el banco clasificó la información por considerar que estaba protegida por el secreto bancario y/o fiduciario en términos del Artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El solicitante impugnó a resolución inconformándose con la clasificación efectuada por la institución bancaria.

En sus alegatos el sujeto obligado reiteró la reserva de la información, adicionando que se trataba de un proyecto de inversión en etapa de evaluación, sin que a la fecha hubiera autorizado u otorgado crédito alguno, por lo que se encontraba en un proceso deliberativo en términos del Artículo 14, fracción VI, de la citada ley.

Con el fin de contar con mayores elementos al momento de resolver se requirió al sujeto obligado información adicional relacionada con el proyecto Monterrey, entre los que destacan los siguientes documentos:

Contrato de asociación pública-privada, sus anexos, instrumentos notariales, estados financieros, propuesta técnica-económica del desarrollador que obraba en la Dirección de Proyectos; y en la Dirección de Banca de Inversión diversos estudios sobre viabilidad del proyecto que incluían planos, características técnicas, oficios emitidos por el sujeto obligado y diversas comunicaciones con el desarrollador, y acuerdos.

Respecto al proceso deliberativo informó que dicha clasificación se relacionaba con los documentos que corresponde evaluar a la Dirección de Proyectos para un eventual financiamiento al consorcio ganador de la licitación del Proyecto Monterrey, para que en su oportunidad someterlo a la decisión de las instancias facultadas de BANOBRAS, por lo que el análisis interno se encontraba en etapa inicial.

Asimismo, durante la substanciación del recurso se efectuaron dos diligencias para tener acceso a la información clasificada.

En ellas, el sujeto obligado aclaró que para los documentos que obraban en la Dirección de Proyectos operaba el secreto bancario, mientras para el caso de la Dirección de Banca de inversión se actualizaba el secreto fiduciario.

El presente recurso de revisión aborda un tema de gran preocupación entre los diversos sectores de la sociedad, como es el abasto de agua para la población. También se refiere a la coinversión de recursos públicos y privados para la construcción de infraestructura que garantice la cobertura y el suministro de dicho líquido, como un derecho humano de todas las personas.

En particular, el proyecto Monterrey 6 contempla la prestación de servicios de suministro de agua para los habitantes de la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León, que incluye la captación, conducción y abastecimiento de agua, mediante el manejo integral del recurso hídrico con efectos benéficos colaterales para el ecosistema y el desarrollo urbano.

De acuerdo con el documento Proyectos Estratégicos agua potable, drenaje, saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, este proyecto contempla la construcción de un acueducto de 372 kilómetros, con un diámetro de 2.13 metros y seis plantas de bombeo que tomará el agua del Río Tampeón, en San Luis Potosí hasta la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, en Nuevo León.

La obra está prevista que concluya en 2017 y tendrá una inversión estimada de 18 mil 283 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento proviene de la iniciativa privada, y el 20 por ciento restante del Fondo Nacional de Infraestructura.

El acueducto será construido bajo el esquema DCOT, es decir, Diseño, Construcción, Operación y Transferencia y será concesionada por 30 años; tres de ellos para la construcción y 27 para la operación.

En este contexto el sujeto obligado interviene en virtud de que realice operaciones y presta servicios de banca y crédito para financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con la inversión pública o privada, en infraestructura y servicios públicos,

para el fortalecimiento institucional del Gobierno Federal, estatal y municipal.

En el proyecto de resolución se analizan las causales de reserva de la información invocada por el sujeto obligado, respecto de aquella que consta en los archivos de la Dirección de Proyectos, relacionados con los supuestos de secreto bancario y el proceso deliberativo precisados en los artículos 14, fracción II y VI, de la Ley de la materia.

Del análisis realizado por esta ponencia, con relación al secreto bancario aducido por el sujeto obligado, se concluyó que la información que obra en la Dirección de Proyectos no deriva de una operación o servicio que actualmente preste, pues aun cuando se está evaluando la posibilidad de autorizar y otorgar el crédito, por tanto será hasta en ese momento en que la empresa solicitante, se constituirá en acreditada del sujeto obligado.

Adicionalmente, se considera que la información relacionada con el proyecto Monterrey, no fue obtenida con motivo de operaciones bancarias en que haya intervenido Banobras, como institución nacional de crédito, puesto que a la fecha, no ha celebrado ningún tipo de contrato, por lo cual no puede operar el secreto bancario.

En relación con la reserva de información prevista en el artículo 14, fracción VI de la Ley de la Materia, aducida por el ente recurrido, se advierte que en el presente caso, actualmente existe un proceso deliberativo en trámite, para definir, en su caso, si se actualiza o no otorgar el financiamiento al consorcio ganador de la licitación del proyecto Monterrey.

No obstante, la información requerida por el particular, no está vinculada directamente con la determinación que llegará a adoptar el Banco, pues sólo constituye el cumplimiento de una serie de requisitos, por parte del posible acreditado y por ende, se trata, tan sólo de un insumo para la decisión, razón por la cual, no se actualiza a nuestra consideración la causal de clasificación invocada por el sujeto obligado.

Sobre el documento que se encuentra en la Dirección de Banca de Inversión, se invocó el secreto fiduciario en términos del artículo 14,

Facción II de la Ley de Transparencia y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Al respecto, debe señalarse que el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, tutelan la información relacionada con los depósitos operacionales o servicios, así como la privacidad del financiamiento del fideicomitente, fideicomisario o mandante o sus representantes legales o quienes tengan poder para disponer de la cuenta e intervenir en la operación o servicio.

Sin embargo, los supuestos de reserva invocados por el sujeto obligado, no se actualizan en virtud de que el origen de posesión del sujeto obligado, no deriva de una operación fiduciaria, puesto que se aportaron para otorgar el apoyo no recuperable al ente público, servicios de agua y drenaje de Monterrey, para costear la realización de diversos estudios de factibilidad del proyecto, sin que tuviera relación directa con el patrimonio fideicomitado.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que la información relacionada con la administración de recursos públicos, debe darse a conocer con la independencia de que se trate de instituciones bancarias, sobre todo, atendiendo naturaleza de los documentos requeridos a través de la solicitud.

En este sentido, dar a conocer dicha información, permite cumplir con uno de los objetivos de la ley de la materia, que es transparentar la gestión pública, mediante la difusión de la información, en posesión de los sujetos obligados.

Lo anterior cobra mayor relevancia, si tomamos en consideración que el proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, donde se menciona que la política hídrica nacional, debe responder en una doble vertiente: por un lado, reducir los rezagos que enfrenta el sector en materia de abastecimiento de agua potable, saneamiento, obras de protección o centros de población y obras de infraestructura hidroagrícola, en algunas regiones y zonas del país, y por el otro, enfrentar las nuevas condiciones que implican los cambios sociales, económicos y demográficos, derivados principalmente de la migración hacia zonas urbanas, en la zona metropolitana de Monterrey, que implica la demanda de servicios, como el abasto de

agua potable, por parte de un mayor número de personas, sin olvidar los efectos de cambio climático, sobre el territorio nacional y el respeto al medio ambiente.

Tomando en consideración que este Instituto tiene la facultad para verificar la actualización de posibles causales de clasificación diversas a las invocadas por los sujetos obligados, se realizó un análisis de la información que se tuvo a la vista con motivo de las diligencias practicadas por la ponencia, determinando que aquellos documentos que contengan Datos Personales e Información Reservada o comercial Reservada deberán entregarse en Versión Pública, en los términos del Artículo 18 Fracciones I y II y 19 de la Ley de la materia.

Por otra parte, se advirtió que diversos documentos contenían características técnicas, planos y mapas, que de hacerse públicos pudiesen derivar en una afectación a la infraestructura y actividad relacionadas con el suministro de agua potable en virtud de que se daría cuenta de los alcances y limitaciones estructurales que tiene el Proyecto “Acueducto Monterrey” colocando en un estado de vulnerabilidad ante actos que pudiesen destruirlo o inhabilitarlo, por lo que en tales casos se actualiza una causal de Reserva por razones de seguridad previstas en el Artículo 13 Fracción I.

Con independencia de las consideraciones técnicas del Recurso, es necesario señalar que, como se refería a continuación, la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México consideran que existe falta de Transparencia en la construcción del Acueducto además de las afectaciones ocasionadas al medio ambiente.

En la ficha técnica elaborada por la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, que derivó del proceso de análisis y dictaminación para una propuesta con Punto de Acuerdo sobre el tema, en dicho documento se señalan inconsistencias sobre los costos de financiamiento, la presunción de un incremento en tarifas de suministro de agua, la participación poco clara de inversionistas y también en el uso del agua que impide saber si se está destinando para el consumo humano o para la extracción de Gas Shale que se ha extraído del subsuelo.

Debido a las diferentes posiciones y apreciaciones sobre los impactos que pueden generar proyectos hidrológicos como “Monterrey 6” se considera deben ser de Transparencia para ponderar a la sociedad sobre sus alcances y su cumplimiento.

También se debe de tomar en cuenta la información que proporcionan las instancias de Gobierno y autoridades involucradas, las cuales deben proporcionar a las personas interesadas la información relativa a su construcción y financiamiento pues al final de cuentas, las políticas públicas impactan directamente en la población, abonan a la confianza ciudadana y al fortalecimiento de la obra pública como fuente de mejora para el desarrollo nacional.

Por las anteriores consideraciones, se estima fundado el agravio en virtud de que no se actualizan las causales de clasificación invocadas por el Sujeto Obligado, razón por la cual propongo a la consideración de los integrantes de este Pleno modificar la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le instruye para que proporcione al particular la información que obra en sus archivos, protegiendo aquella información que pueda comprometer la Seguridad Nacional o Datos Personales en los términos previamente expuestos.

Es cuanto, Comisionados.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias a la Comisionada Areli Cano.

Se abre el espacio para los compañeros Comisionados que quieran hablar.

El Comisionado Joel Salas Suárez.

Comisionado Joel Salas Suárez: Muchas gracias, Comisionado Presidente.

A ver, ¿cómo entrarle a este tema?

Tiene múltiples aristas y celebro, desde luego, el hecho de que la Comisionada Cano haya decidido exponerlo públicamente, al menos por las tres siguientes razones:

La primera -y nadie de los que están aquí o de los que nos están escuchando puede pasar por desapercibido que ayer se aprobó finalmente la Ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción- es porque justamente organizaciones de la sociedad civil y empresarios en el Estado de Nuevo León, concretamente ahorita me voy a referir a organizaciones de la sociedad civil, implementaron una muy buena práctica en Nuevo León, que se llama “El Corruptómetro”.

¿Y qué pasa con este Corruptómetro?

Bueno, pues es un camión mediante el cual se hace un trayecto para ir viendo a lo largo de la Ciudad de Monterrey y San Pedro, aquellas obras en las que potencialmente se realizaron con un grado posible de corrupción.

Hace unos meses las organizaciones que encabezan este ejercicio y este esfuerzo definieron que iban a poner el Acueducto como parte del Corruptómetro.

¿Y por qué?

Bueno, hay que recordar que el proyecto originalmente estuvo previsto, creo que es un proyecto creado desde creo el mes de febrero del 2008 y la inversión original era de 17 mil millones de pesos. Bueno, pues ahora ya son 47 mil millones de pesos.

¿Por qué, qué se modificó, qué justifica?

Pues es información que se desconoce.

Entonces, en el Estado de Nuevo León hay una gran movilización en torno a este proyecto.

Múltiples organizaciones de la sociedad civil también han señalado que este ejercicio es poco sustentable en el tiempo por el costo que implica el bombeo del agua del Río Pánuco para abastecer la crisis hídrica que hay en la Ciudad de Monterrey.

Es un proyecto poco sustentable, como bien lo comentaba la Comisionada Cano.

Otro elemento que quisiera aportar en función de estos comentarios preliminares, ahorita voy a entrar al otro tema que tiene que ver con la Alianza Para el Gobierno Abierto, es que simple y sencillamente organizaciones civiles el pasado 30 de enero, señalaron que hay 12 razones técnicas, ecológicas, económicas y socio-políticas por las cuales el Acueducto no debe construirse.

Entre ellas destacan, pone en severo riesgo la estabilidad política y social regional al quitar el agua a otras comunidades y provoca severos daños a los ecosistemas de las cuencas involucradas.

Bueno, me suena también a otro tipo de proyecto que hemos discutido aquí, como es el de las Tres Cruces.

Pero no sólo son las organizaciones de la sociedad civil. El pasado cuatro de marzo, el Presidente de la COPARMEX, señala: Que este proyecto se tiene que parar temporalmente hasta que se aclaren todas las dudas e irregularidades que existen en el proyecto.

Y cito al Presidente de la COPARMEX, una organización que reúne a los empresarios y creo que el Estado de Nuevo León si por algo se caracteriza, es por la importancia que tiene el sector empresarial y dice el Presidente de la COPARMEX: “Entonces necesitamos sentarnos a realmente analizar, abrir la información, a discutirlo y de perdida tomaremos unos 10 meses para parar el proyecto temporalmente hasta tener todas las dudas muy claras”.

Bueno, pues lo que hace este recurso de revisión es instruir a que parte de la información que demanda la sociedad para poder conocer la viabilidad y las dudas que ha generado este proyecto se disipen.

Segundo punto. No olvidar que este proyecto hace uso de recursos federales y que al hacer uso de recursos federales, bien podría o este proyecto se relaciona con dos compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto, el 12, Infraestructura para todos, y el 13, Sigue la obra pública.

Bueno, pues toda la información que se está solicitando, toda la información sobre la cual hay dudas o suspicacia en torno a este proyecto, pues debería de estar por la magnitud y lo que representa, pública, para como lo hemos dicho en otros proyectos de infraestructura tan importantes como el Aeropuerto de la Ciudad de México, se pueda generar una verdadera contraloría ciudadana.

Y termino con un tema que es el tercero, que ha estado también presente en la opinión pública y es que, parte al parecer de los contratos que se van a ejecutar en torno a este proyecto, pues nada más y nada menos, quizás el nombre de la empresa les va a sonar, pues es la empresa IGA, entonces en torno a este tipo de proyectos, en torno al clima que se vive en el país, que se acaba de aprobar la reforma que va a generar el Sistema Nacional Anticorrupción, pues el antídoto es abrir toda esta información, por lo cual celebro este proyecto y desde luego, acompaño la propuesta que nos está haciendo la Comisionada Cano.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Comisionado Joel Salas Suárez.

Comisionada Kurczyn. Yo también me quedo con la.

Areli ¿quieres hacer uso?

Bueno, realmente para cerrar, desde luego reconocer el esfuerzo y cómo estos asuntos, aunque todos son importantes, lo reiteramos cada sesión de Pleno porque nos toca en colegiado garantizar estos derechos de acceso a la información pública y estos también de protección de datos personales, cómo se debe focalizar y cómo se aprovecha para con la amplia exposición que hizo Joel Salas Suárez en complemento del planteamiento que hizo Areli Cano, entender cómo es útil el derecho de acceso a la información, no es solamente un asunto para satisfacer el interés, como al principio de esta causa se decía, el mero morbo, no.

Es un asunto que tiene que ver con el progreso y la ubicación y la detección de posibles desvíos o actos absurdos, actos que son cuestionables y que desde luego nos conciernen a todos.

Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Como no, muchas gracias. En realidad no quisiera abundar en los comentarios que ya hizo el Comisionado Salas, son muy completos y la verdad es que todo, pero debo de felicitar a la Comisionada Cano porque la resolución que se da, se fundamenta de una manera extraordinaria en la que se hace una verdadera defensa de lo que es el secreto bancario o el secreto fiduciario en el que se ve con mucha profundidad el proceso deliberativo que no daba caso para abrir la información, la defensa que se hace sobre la no clasificación de ir sobre el derecho, a no clasificar o el no derecho a clasificar, mejor dicho, la información que nos da el sujeto obligado, y yo creo que ésta es una muestra de cómo en la ponencia de la Comisionada Cano, como en nuestras ponencias en general, se analizan los casos con una gran profundidad.

O sea, no solamente estamos deliberando y no solamente estamos resolviendo para determinar y darle al sujeto obligado, en todo caso, la revocación de la modificación, sino que está realmente fundamentado, y en este caso particular, que lo estuve observando, yo quiero felicitar a la Comisionada Cano por la defensa que hace en este asunto.

Gracias.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Comisionada Cano, el Comisionado Joel Salas.

Dado que ella es la ponente, permitimos que primero Joel.

Comisionado Joel Salas Suárez: Muy rápidamente, a partir del comentario de la Comisionada Kurczyn, y quizás sí dejarlo claro en lo que yo expuse y destacar, como ya lo planteaba la Comisionada Cano, se está pidiendo que se abra toda esta información en función de las causales de reserva que invocó el sujeto obligado, secreto bancario, secreto fiduciario y proceso deliberativo.

Recordar que en el caso del secreto bancario y secreto fiduciario, ya quedó claramente definido en la nueva Ley de Transparencia que ya

se aprobó y que esperemos que se publique próximamente y que entre en vigor en un año.

Entonces, aquí el sujeto obligado ya debería de empezar a tener conocimiento que esas causales de reserva, la nueva ley no lo va a permitir.

Pero sí destacar que en la resolución es muy clara, en el sentido de que aquella información relativa a datos personales y, sobre todo, a información técnica que puede poner en riesgo el proyecto, sí se debe testar y por lo tanto, se debe de generar una versión pública.

Pero todo aquello que genera suspicacia en torno a los contratos, los montos que se están generando con esta institución bancaria del Estado Mexicano, y sobre todo, en función de las causales de reserva que esbozan, no tienen fundamento y por lo tanto, por lo que veo, este Pleno va a instruir a que esa información se abra.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Comisionada Cano.

Comisionada Areli Cano Guadiana: Era precisamente para, ya me gana el comentario el Comisionado Salas, pero era para precisar esta consideración de la nueva Ley General, donde ya expresamente viene establecida esta causal.

Y simplemente decir que este proyecto permitió, fue un proyecto que realmente en la instrucción, pues ahora sí que son de esos sujetos obligados que defienden a cabalidad la legalidad de su acto. O sea, sí hay argumentos a consideración del sujeto obligado para defender su legalidad.

Diríamos que fue un recurso bien litigado por él, simplemente hacer esta ponderación y razonamientos, pues estas son las consideraciones técnicas que se ponen a su consideración.

Pero estuvo bastante atento el sujeto obligado, atendió los requerimientos de información, también mandaron a las personas, me parece responsables de la información para justificar la legalidad de su acto, pero bueno, a fin de cuentas se ponderan estas

circunstancias de Apertura a la Información y esto porque así se presenta el Proyecto.

Agradezco los comentarios, a fin de cuentas es trabajo de la ponencia. Muchas gracias.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Ya para cerrar aprovecho para decir -como lo ha dicho desde luego la Comisionada Kurczyn y antes el Comisionado Joel Salas- que este ha sido un asunto ilustrador, una resolución ilustradora porque sobre todo nos permite diferenciar en muy poco tiempo.

Esperemos que la Ley General de Transparencia sea promulgada muy pronto para que surta todos sus efectos, sobre todo en la transformación tanto de prórrogas y reservas huecas, como lo hemos dicho.

Como ha dicho Areli Cano, si bien algunos Sujetos Obligados se esmeran en litigar -como bien lo dijo, porque no es más que un mejor término- con todos los medios posibles la defensa de abrir esta información, por un lado parecería loable porque más de las veces son tan burdas las excusas de las Reservas o son tan lamentablemente interesadas, que por ello las hemos aquí fustigado.

Sin embargo, afortunadamente la Ley General de Transparencia vendrá a complementar los efectos de nuestras Resoluciones, que ya son definitivas e inatacables y esto vendrá a surtir efectos en consonancia con la Reforma Constitucional que ayer efectivamente se aprobó sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que naturalmente, una vez que pase por las Legislaturas de los Estados, también cobrará vigor y naturalmente después, las Leyes Secundarias, que es el trasiego parlamentario de todos los asuntos para que tengan concreción.

Yo quisiera nada más recordar el origen de muchos de los problemas del urbanismo y la evolución de las ciudades, de estas macrourbes o las macrocefalias en que se han convertido las grandes zonas urbanas.

Yo tuve la oportunidad de vivir en Nuevo León cinco años de mi juventud y vivir justamente cuando el entonces Gobernador Don Alfonso Martínez Domínguez, personaje celeberrimo por sus capacidades histriónicas y su gran oratoria, hizo construir una Presa para dar con ello precisamente el auxilio a los apremios del vital líquido en aquella ciudad que, como Guadalajara o después de Guadalajara, crecieron descomunamente.

Recuerdo -para cerrar esto con cierto tono de anécdota- que luego fue muy criticado porque en la Macroplaza, también con esa cierta visión un poco de cierto orgullo regional excesivo, hizo colocar una Fuente de Neptuno cuando naturalmente había enorme apremio por los períodos de estío ya que allá las secas son durísimas.

Como colofón -ya lo dijo Joel- diría que lo más delicado de esto es cuando se hace el escrutinio público y se conecta que las grandes obras por desgracia pueden ser, muchas de las veces y cada vez con más lamentable evidencia, un caldo de cultivo para oportunidades y oportunistas que buscan en ellas botín.

Así es que con la función de este Nuevo IFAI, como órgano constitucional garante y ahora expansivo en sus competencias a los nuevos Sujetos Obligados y el Sistema Nacional Anticorrupción, ya en gestación y ya en promisorio inicio, van a venir a darle a esto un seguimiento para erradicar la corruptela y me gustó mucho el término de “el corruptómetro”.

Comisionado Joel Salas Suárez: No, es “corruptour”.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: ¿”Corruptour”?

Ah, yo creí que era un “corruptómetro”, bueno, perdón, pero está muy bien, el “Corruptour” que finalmente dice lo mismo, un recorrido por la ostentosa vergüenza del oprobio, del abuso y del exceso.

Pues muchas gracias.

Entonces pues, comisionada, con eso cerramos la discusión y felicitamos, desde luego, a la comisionada ponente, Areli Cano.

Si no hay más que decir sobre este asunto, pedimos a la directora General Bárcena, que tome la votación.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Conforme a su instrucción, Comisionada Cano.

Comisionado Areli Cano Guadiana: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos:

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionado Joel Salas Suárez:

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionado Acuña.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: A favor, por supuesto.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: De esta manera, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA-0149/15, en el sentido de modificar la respuesta del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito.

Es cuanto.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Estábamos, desde luego, atendiendo la continuación de la sesión.

Como hemos dicho, y siempre es así, se siguen un orden cronológico de los asuntos.

Por eso toca ahora al Comisionado Joel Salas, presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA-532/15, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que somete a consideración de este Pleno.

Comisionado Joel Salas Suárez: Con gusto, Comisionado Presidente.

Solicitaría apoyo, por favor, a la Directora General Bárcena, para que nos presente una breve síntesis del proyecto.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Sí, Comisionado Salas.

El particular solicitó al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, en la modalidad de entrega por internet en el Infomex, los estudios de valoración económica, ambiental y/o de riesgo ambiental realizados en ríos y arroyos del Estado de Sonora, luego del derrame de sustancias contaminantes ocurrido en agosto de 2014.

En respuesta el sujeto obligado informó, que para atender lo relacionado con dicho derrame se creó una Comisión Especial, la cual ha dado seguimiento puntual al tema, orientando al particular a dirigir su solicitud a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El particular se inconformó ante este Instituto con la respuesta dada por el INEC.

En alegatos el sujeto obligado reiteró su respuesta precisando que una vez interpuesto el recurso de revisión el Coordinador General de Crecimiento Verde, informó que dentro de sus archivos no cuenta con ningún estudio técnico o ambiental o estudio de valoración económica que tenga el carácter de vinculatorio o una relevancia descriptiva para pericialmente dar una postura relacionada con el accedente en cuestión.

El Comisionado Salas propone a este Pleno: Revocar la respuesta del sujeto obligado.

Es cuanto.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Pone, desde luego, al ponente a exponer.

Comisionado Joel Salas Suárez: Muchas gracias a ambos.

Este caso es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por este Pleno para la discusión de los recursos en público, y es exponer públicamente casos en función de su importancia y utilidad con respecto a los derechos de las personas.

El recurso que hoy presentamos se relaciona con un tema que ya fue discutido públicamente por este Pleno.

En enero esta ponencia presentó el recurso con la clave RDA-5240/14, relacionado con el peor desastre ambiental en la historia moderna de nuestro país, según lo calificó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El seis de agosto de 2014, ocurrió un derrame tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, concesionada a la empresa Grupo México.

Los daños causados ascienden a por lo menos mil 800 millones de pesos y afectaron a 24 mil personas, de acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Para subsanar estos daños, Grupo México propuso un programa de remediación, del cual se ha avanzado en atención de una de cinco zonas en riesgo.

La empresa, también debió construir un Fideicomiso de dos mil millones de pesos que incluye entrega de apoyos económicos, los cuales debieron ser entregados en su totalidad el 15 de febrero del año en curso.

Otras acciones, son la limpieza de los ríos, el monitorio de las aguas superficiales y subterráneas de los pozos utilizados por la minera, la atención médica a la población, etcétera.

El mes pasado surgió el movimiento Todos Unidos contra Grupo México conformado por pobladores de la zona y mineros de la Sección 65 del Sindicato Minero Nacional, el cual tiene apoyo de representantes de otros grupos nacionales e internacionales como Yaquis, Padres ADC, y United State Workers.

El Movimiento organiza foros de información para los afectados aunque sus demandas van más allá de esto.

Exige atención a los afectados cuyos pagos fueron suspendidos dada la temporada electoral, así como la revisión de las condiciones laborales de los mineros.

Han desarrollado acciones de protesta como el bloqueo de carreteras y pozos utilizados por la minera, por lo que han sido denunciados por Grupo México ante probable robo, despojo y daños a los pozos de agua.

En el recurso de revisión que estamos discutiendo, el particular solicitó al Instituto Nacional de Ecología los estudios de valoración económica, ambiental y/o riesgo ambiental realizados sobre el derrame tóxico provocado por la minera de Grupo México en estos ríos.

En respuesta, como ya se dijo, el sujeto obligado contestó que el Gobierno federal conformó una Comisión Especial para dar seguimiento al tema, y dado que fue coordinada por la SEMARNAT, le orientó a dirigir su solicitud a ella.

El particular, evidentemente, se inconformó ante este Instituto por la respuesta arguyendo que, a pesar de que dicha Comisión existe, el Instituto Nacional de Ecología es el órgano facultado para realizar los estudios que él demanda.

En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta y agregó que consultó a la Unidad Administrativa que podría ser competente la cual, aclaró que en sus archivos no cuenta con la información solicitada.

De acuerdo con el análisis realizado por esta ponencia, el agravio del particular resulta fundado por los siguientes motivos:

En primer lugar, la Ley General de Cambio Climático dispone que el sujeto obligado es competente para atender la solicitud del particular.

Está facultado para realizar estudios de investigación científica o tecnológica en materia de protección al ambiente y colabora con la SEMARNAT en la cuantificación de costos por contaminación al ambiente.

Segundo lugar. El Ejecutivo federal así como la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, conformaron comisiones especiales para atender la problemática ambiental a la que nos estamos refiriendo en el presente caso.

En este marco, el Instituto Nacional de Ecología, participó en el análisis de dictámenes para cuantificar el daño causado.

Esta ponencia, en esta ponencia localizamos un boletín de prensa de la Cámara de Diputados que corrobora lo anteriormente señalado.

Por otro lado, en materia de transparencia, consideramos que este caso es fundamental para visibilizar que las consecuencias de un daño ambiental, van más allá de las pérdidas económicas y que la sociedad exige, como lo veíamos también en el caso anterior, y requiere información sobre cómo y cuándo los gobiernos actuarán para reducir las consecuencias de estos daños en sus vidas cotidianas.

Los recursos mineros, sin duda, pertenecen a la sociedad mexicana. El uso y destino de los mismos, deben ser decididos por la sociedad en general.

Sin embargo, dado que su explotación implica afectar las zonas cercanas, sus habitantes, deben poder conocer los efectos y su magnitud, así como los posibles riesgos latentes y/o colaterales.

Me permito citar un estudio de Fundar: “La actividad extractiva, ha agudizado los problemas de marginación y exclusión social, debido principalmente a la afectación de las actividades productivas tradicionales, los daños al medio ambiente, la contaminación, y el incremento de los precios que esta actividad ha traído consigo”. Concluyo la cita.

¿Cómo pueden entenderse las comunidades de estos riesgos? La respuesta es muy simple: con información.

El Gobierno Mexicano ha reconocido lo anterior con compromisos internacionales que prevén acciones para facilitar el acceso a la información que promuevan la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos de las comunidades cercanas a lugares de explotación de recursos naturales.

Recordar en primera instancia que México es firmante de la declaración sobre la aplicación del principio 10, en América Latina y el Caribe, celebrada el 10 de junio de 2012.

También están los compromisos que reiteradamente señalamos en este Pleno 23, Minería para todos; 24, cuidado al medio ambiente basado en evidencia, y 26, adhesión de México a la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas de la alianza para el Gobierno abierto.

Vale la pena mencionar que precisamente la semana pasada, concretamente el pasado martes 15 de abril, se llevó a cabo en las instalaciones de este Instituto, la Segunda Reunión de Presentación de Avances de los Compromisos del Plan de Acción de la Alianza 2013-2015.

Entre otras actividades, se realizaron mesas de trabajo, en las que gobierno y sociedad civil organizada, evaluaron conjuntamente el nivel de compromiso de cada uno de los 26 establecidos.

En cuanto al cumplimiento de los compromisos listados previamente, se admitió que se tenía un nivel parcial de cumplimiento.

Dicho nivel parcial de cumplimiento es evidente en el caso que estamos discutiendo.

¿Cuánto dinero se destina para atenuar los daños? ¿Cuál es el grado de contaminación que aún se presenta en estos ríos y en las zonas aledañas?

¿El agua de los pozos es apta para consumo humano y de los animales en la región? ¿Qué pasa con la fauna y la flora de la zona? ¿Los suelos siguen siendo aptos para recibir los cultivos que tradicionalmente se realizan en esta región?

¿Cambiarán las actividades económicas tradicionales de la zona? }

Si los Sujetos Obligados involucrados responden a estas preguntas que formulamos y que en realidad son formuladas por los afectados y la población en general, atenderá su derecho a mantenerse informados y participar a lo largo del proceso de toma de decisiones; es decir, desde la identificación de posibles soluciones, pasando por la implementación y hasta poder generar una evaluación posterior al daño causado por este accidente.

Organizar ruedas de prensa o instalar mesas de atención temporales no es suficiente para asegurar la Transparencia de las acciones gubernamentales llevadas a cabo para subsanar los daños ecológicos.

Frente a contingencias ambientales, es necesario proporcionar la información de manera constante, organizada y de acuerdo a las propias necesidades de la población.

Las autoridades federales, estatales y municipales deben estar coordinadas a manera que favoreciendo el principio constitucional de Máxima Publicidad, estén en capacidad de contestar lo que esté bajo sus atribuciones, algo que -como queda claro en este Recurso y espero que en esta exposición- el Instituto Nacional de Ecología no está realizando en este caso.

Es por lo anteriormente expuesto que proponemos a este Pleno revocar la respuesta del Instituto Nacional de Ecología y que se le

instruya a realizar una búsqueda exhaustiva de los estudios de valoración económica, ambiental y/o de riesgo ambiental realizados respecto del accidente ocurrido en agosto de 2014, donde se derramaron sustancias contaminantes en ríos y arroyos del Estado de Sonora, en todas sus Unidades Administrativas competentes entre las que no podrá omitir la Coordinación General de Crecimiento TOVERDE y la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental a efecto de que sean proporcionados al particular.

Es cuanto, compañeros de Pleno.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias por la exposición.

Agradezco en el sentido de los muchos datos y los muchos elementos que se acompañan.

Toca ahora que los Comisionados podamos hacer algunos comentarios.

La Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Sí, cómo no. Muchas gracias.

Bueno, compañera y compañeros Comisionados, auditorio que nos escucha, que nos ve:

No tenía yo preparado el hacer algún comentario al respecto pero de verdad que me impacta mucho todo, cómo hemos estado resolviendo copiosamente muchos Recursos que refieren temas de agua, de contaminación, de cambio climático, todo lo referente al medio ambiente.

Este no es un asunto menor pues se trata del medio ambiente que se vincula con los Derechos Humanos, a la Vida y a la Salud, en principio, pero que repercute en otros más.

Es urgente que se tome conciencia de estos temas, conciencia por la sociedad para observar, para cuidar y vigilar que se cumplan las leyes

sobre la materia, que se impidan y se prevengan acciones contrarias, que como dije antes, no sólo afecta derechos humanos en lo individual, sino que trasciende a los llamados derechos humanos de la tercera generación, que aun cuando es un término que no me gusta mucho, se utiliza y que igualmente tiene un impacto económico, que interfiere en el desarrollo y en el progreso.

Esto es, que se afectan los derechos humanos de seres, de seres vivos, de personas como nosotros que están alejados y que están viviendo en comunidades aisladas, en cuyos servicios son precarios y que encima de todo esto los vemos sufrir por el tema, por ejemplo, del agua.

Es decir, aquellas escenas en las que nos presentan a las familias, con los niños llenos de erupciones y de otro tipo de provocaciones en su salud, derivado de que tienen el agua de los ríos que utilizan normalmente, que su ganado mismo lo consume, que es el agua también con que riegan sus plantas y demás comestibles y que todo esto los sigue afectando.

Afecta a los no nacidos por la repercusión que tiene en los padres que van todavía a crear sociedad, que van a crear hijos, afectan niños, afecta a los adultos de todas las edades, se afectan los derechos sociales que incurren en el proceso y en la progresividad de los derechos sociales, como son la propia seguridad social vinculada con la protección o equivalente a la protección social de la población y todos los derechos humanos ya mencionados, en los que en este caso destacan los ambientales.

Por eso considero de relevancia que esos asuntos sean resueltos y se separe para su votación, con lo cual se detona más la importancia en la rendición de cuentas en estos temas en los cuales se llama la atención para la población y también para las autoridades involucradas en las distintas gestiones administrativas sobre el medio ambiente y sobre todo las autoridades involucradas en los temas de la salud.

No dejamos fuera, por supuesto, las implicaciones que se dan en los terrenos de lo económico y, desde luego, en lo laboral; el impacto que eso tiene en lo que le cuesta a la sociedad misma el después poder

responder a los pequeños o grandes problemas de salud que se representa en la población, que además está desprotegida con todos los efectos que tiene este tipo de contaminaciones y este tipo de problemas pues es verdaderamente relevante.

Esto es pues que son derechos que afectan en cadena y que en cadena también se deben de ir resolviendo atacando el principal problema. Es decir, en ese caso todos los temas ambientales y ecológicos.

Por eso disculpen que haya hecho este comentario, sino haber hecho una referencia muy concreta al tema, pero sí de manera general.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Por supuesto que se agradece, desde luego, la complementación, porque de esto se trata, la garantía de estos derechos tiene que ver con la exposición además complementaria por el colegiado.

Finalmente se exponen por uno de los ponentes, toca el turno de los asuntos y después lo hacemos nuestro al momento de votarlo.

Comisionada Cano.

Comisionado Areli Cano Guadiana: Gracias.

Estoy sugiriendo que este tema evidentemente trae circunstancias colaterales al tema que nos ocupa.

Y me parece que este proyecto no pudo definirse en mejor momento que el día de hoy, 22 de abril, que es el Día Internacional de la Madre Tierra, el cual según la ONU está enfocado a crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra.

La actividad minera, como la mayor parte de las actividades económicas que realiza el hombre, crea alteraciones en el medio natural, las cuales implica la emisión de contaminantes, sobreexplotación de recursos, la modificación del paisaje e incluso, las

que modifican el entorno social, económico y cultural, como ya se ha comentado aquí.

Esto nos lleva a definir que el impacto ambiental de una actividad económica es la diferencia existente en el medio ambiente, en el momento en que comienza la actividad, en el momento en que la actividad se desarrolla y sobre todo, al momento en que se concluye.

El caso del recurso que hoy nos presenta el Comisionado Salas se trata del impacto ambiental ocasionado por la actividad minera al momento de su desarrollo.

Estas cuestiones se contemplan con gran preocupación, pues en la actualidad el proceso de afectación del entorno natural se ha acelerado por el uso de las nuevas tecnologías, lo que rebasa en muchos casos la capacidad de la propia naturaleza para regenerarse poniendo en riesgo la sustentabilidad hacia el futuro.

Comparto, evidentemente, digo, lo decimos con distintas palabras pero es la misma preocupación que ya expresó la Comisionada.

Esta es la razón que convierte el tema de impacto ambiental en tales actividades económicas en un tema de interés social. Sin embargo, independientemente de la conveniencia de que se conozca toda la información sobre ello, lo cierto es que las violaciones de los impactos desencadenan otro tipo de datos igualmente importantes, por ejemplo, las medidas tomadas por las autoridades para la solución del problema, o bien, el tema de la responsabilidad social de las empresas.

Esa preocupación de los Gobiernos, de organizaciones civiles y de la sociedad en su conjunto, la reparación de daños ambientales para procurar su preservación y que la sociedad pueda seguir siendo beneficiada con la utilización de estos recursos, y más cuando de la contaminación del agua se refiere, un estudio sobre temas ambientales realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados indica que el 57 por ciento de los ciudadanos considera que el problema ambiental se debe atender con mayor celeridad y, particularmente, hacen alusión a la contaminación del agua.

En el mismo estudio, se revela que 9 de cada 10 mexicanos está de acuerdo en que las personas o empresas que ocasionan daños ambientales se hagan responsables de ellos.

En este sentido, hablar de la reparación de los daños no debe entenderse sólo como la atención de los efectos negativos causados a las personas y a los bienes materiales, sino a los casos concretos del deterioro ambiental.

Hablar de responsabilidad social de las empresas permite fortalecer la conciencia colectiva de que los individuos han de responder por las consecuencias que pueden tener sus actos sobre el entorno natural, y más cuando es un tema claramente regulado, ya se comentó aquí sobre la Ley General de Cambio Climático, pero también la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, la cual señala que todas las personas que contaminen o deterioren el ambiente, o afecten los recursos naturales o la biodiversidad serán responsables y estarán obligadas a reparar los daños causados.

De esta forma, garantizar el acceso a la información que solicita el ahora recurrente, permite además de conocer el impacto real que existió por los derrames causados en el río Sonora a causa de las actividades mineras, también puede desencadenar el interés sobre temas sobre la que he expuesto, las medidas adoptadas para la reparación del daño tanto por el Gobierno como por las empresas, que abona a una mejor rendición de cuentas y claro, evidentemente a una garantía y un derecho humano, que ya lo comentaba la Comisionada Kurczyn, de sustentabilidad del entorno ambiental a la que todos tenemos derecho.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Comisionada Cano.

Yo quisiera nada más agregar que desde luego estas son provocaciones, ya se decía por la Comisionada Kurczyn, cuando exponemos estos casos, sobre todo los que ligan problemas de operación por negligencia, por descuidos, por miserables, medidas de austeridad, a veces irresponsable de las empresas por falta de vigilancia de las instituciones que deben hacer verificaciones

permanentes para precisamente en una política de riesgos ambientales, prever y por supuesto evitar en lo posible desastres de esta naturaleza, agregar esos casos lamentables de Coahuila, el 2006 Pasta de Conchos, que la empresa fue Altos Hornos de México, muchos más de 60 muertos en esa terrible explosión, y en Coahuila también, el 2011 en la Mina La Esmeralda un derrumbe de carbón de 100 toneladas de carbón; la minera aquí la empresa es Minerales de Monclova, S.A.

Y nada menos, en consonancia con las Efemérides, por un lado la que Areli Cano mencionaba que es desde luego la que nos insta, como bien decía, por la pertinencia el día de hoy, el día de la Madre Tierra, la mañana del 22 de abril justamente, hace 23 años en Jalisco, en Guadalajara se llevó a cabo esa terrible explosión de 13 kilómetros del drenaje que causó tantos muertos y sobre todo la evidencia de la corruptela y de los penosos ejercicios subterráneos del ejercicio público, nunca mejor dicho, desde luego en detrimento de la población.

Naturalmente agradecer, reconocer al ponente por el estudio y la exposición y si algún dato adicional quiere aportar, pues pedimos entonces, en este caso a la Directora Bárcena, tomar la votación.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación Rosa María Bárcena Sánchez: Sí, Comisionado Acuña.

Comisionada Cano.

Comisionada Areli Cano Guadiana: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionado Acuña.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña Llamas: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación Rosa María Bárcena Sánchez: De esta manera, se aprueba por unanimidad, la resolución del recurso de revisión número RDA0532/15, en el sentido de revocar la respuesta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Es cuanto, Comisionado.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Alguna duda de libreto.

Es que según mi lista, me toca a mí exponer, pero tengo duda, porque la Comisionada Kurczyn tiene el otro asunto, el mío es el 589, el tuyo es el 1300, me corresponde.

Perdón, hace más espontánea la conducción de los asuntos.

Que se aproveche el dislate mío, en el desparpajo de los manejos de la cronología para esperar tantito a retomar el Pleno.

Y es que decían sobre estos asuntos de la extracción, por un lado, la paradoja, es decir, las minas que fueron y han sido, desde luego históricamente además, uno de los principales pretextos de la colonización, en el caso de España, fueron las minas prácticamente, la pequencia por los metales preciosos, fueron los que en principio impulsaron las empresas de construcción y de localización de fondos mineros.

Ahora que éstas han retomado fuerza porque además -hay que decirlo- debido a las tecnologías tan precarias de la época, muchas de esas minas quedaron sin ser abatidas en sus vetas y en sus reservas pero ahora que se exponen y que se amplían, nos vienen a dar estas tremendas.

Entonces solicito la anuencia de mis compañeros para exponer al Pleno el Recurso RDA-589/15, dirigido en este caso el Recurso, interpuesto en contra de Pemex Gas y Petroquímica Básica.

La solicitud que echó a andar la maquinaria pública -en este caso del Sujeto Obligado responsable que es Pemex Gas y Petroquímica Básica- y luego la de nosotros fue en auspicio del ciudadano reclamante que naturalmente se encontró con una muralla cuando le fue negada esta información.

El solicitante reclamó porque yo me niego a estar hablando de "Solicitud" pues el Derecho de Acceso a la Información es un reclamo de información, un reclamo informativo; no es esa visión pedigüeña y mendicante con la que en el esquema del Estado no democrático se planteaban las cosas pero bueno.

Dado el eufemismo con el que nosotros manejamos muchas veces las cosas, esas modosidades y esas complacencias de término, el reclamo informativo fue la copia en versión electrónica del listado de recursos económicos destinados para la Sección del Sindicato Petrolero en el Estado de Tabasco, la Sección correspondiente a Tabasco -pero del Sindicato Petrolero, que es nacional- durante el año de 1994 al 2014; o sea, 20 años de recursos económicos destinados por Pemex Gas y Petroquímica Básica al Sindicato Petrolero Sección Tabasco durante los años 1994 al 2014. Pero además, lo pide -por supuesto- en versión electrónica, desglosado por año y objetivo del recurso entregado.

Entendemos de inmediato que aquí, tras una prórroga, Pemex Gas y Petroquímica Básica respondió que fue notificada de la Demanda de Amparo interpuesta por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, misma que se radicó ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, bajo unas siglas y un número 100 del 2015.

Por tal motivo, a fin de no caer en desacato o incurrir en desacato a una autoridad judicial, se le informa -esa fue la respuesta- que por el momento esta Unidad de Enlace, la de Pemex Gas y Petroquímica Básica, se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para dar atención a la presente Solicitud de Información, entregar la misma o

ponerla a su disposición, tal y como lo señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Eso fue lo que expuso en su respuesta Pemex Gas y Petroquímica Básica al solicitante.

¿Qué pasó?

Que en los alegatos -como ocurre y ustedes lo saben, lo hemos dicho y lo decimos siempre- cuando nos turnan los asuntos, cuando se antepone o se alegan Reservas de Información o algún otro tipo de posible salida para no entregar la información, nosotros hacemos venir al sujeto obligado. Y en este caso, pues se conoce de esta etapa como de alegados. Ellos vienen a exponer o envían algún documento para exponer sus razones.

PEMEX-Gas y Petroquímica Básica, precisó que en ningún momento negó la información solicitada. O sea, prueba de ello –dijo- es el oficio tal, de fecha 20 de enero de 2015, a través del cual se informó al Sindicato de Trabajadores Petroleros que entregaría la información objeto de la solicitud número tal”.

O sea, PEMEX dijo, emitió un oficio, que además pudimos conocer, en el que efectivamente, en tiempo y forma le avisó al sindicato, al Sindicato de Petróleos, claro en la Sección de Tabasco, que iba a entregar la información correspondiente.

Esto, desde luego, hizo que el sindicato interpusiera el amparo que luego vino a servir de traba para que se pudiera entregar la información.

Voy hacer los comentarios breves, porque hay que ser muy atentos en este caso a la relación de los hechos, dado que se trata además de un tema que está involucrado con los sindicatos y que serán pronto también en los tiempos que la propia Ley General de Transparencia establece para lo que llamamos la implementación o el periodo de adaptación a las nuevas circunstancias de los nuevos sujetos obligados y que, desde luego, aquí entre nosotros corresponderá esta cuestión, a esta Comisión de Asuntos a la Comisionada Kurczyn.

Pero del estudio efectuado por la ponencia a mi cargo advertimos lo siguiente: La Unidad de Enlace de PEMEX-Gas y Petroquímica Básica, respetando la garantía de audiencia, hizo del conocimiento del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana la solicitud de acceso que nos ocupa.

Yo aquí diría más que notificó, porque finalmente la garantía de audiencia era difícil entender que el sindicato considerara algo para oponerse a que se entregara esa información.

Cabría, desde luego, en la interpretación que alguna porción de esa información, como lo veremos adelante, sí puede contener datos personales efectivamente de los trabajadores.

La citada agrupación sindical promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, en Materia Administrativa, reclamando la entrega de la información requerida en la solicitud de acceso materia de este asunto.

Es decir, interpuso un amparo para detener la entrega de esta información, pues esperando que, desde luego, la autoridad judicial manifestara lo conducente, si era válido, si era correcto, si era legal que se hiciera esta entrega de información.

De una revisión del estado procesal del Juicio de Amparo Indirecto invocado por la autoridad, en este caso por el sindicato que fue el invocado, pero la autoridad, en este caso la autoridad que lo invoca es PEMEX. Cita que no pudo entregar la información al solicitante, porque el juez de amparo se lo impidió primero cuando dictó una suspensión provisional y después cuando incluso dictó suspensión definitiva.

Es decir, con fecha 18 de marzo de 2015, el juez de la causa dictó sentencia, mediante la cual sobreseyó el juicio de amparo promovido, o sea, dejó sin efectos la causa que lo impulsó y negó la protección a la quejosa, en este caso al sindicato de PEMEX en la Sección Tabasco, resultando inoperante el impedimento requerido por la autoridad.

Es decir, ya con esto no había manera que la autoridad, en este caso PEMEX-Gas y Petroquímica Básica pudiera atender la solicitud de acceso a la información, por supuesto ya en los términos superados porque se antepuso este amparo.

Además de lo anterior, tenemos constancia que a la fecha en que se resuelve el presente recurso de revisión, o sea ahora, el plazo de 10 días previsto para que las partes interesadas hicieran valer el recurso correspondiente para impugnar la propia sentencia del Juez de Amparo, siendo ante el Tribunal correspondiente del Poder Judicial de la Federación, por lo que la misma –así lo decimos los abogados, estamos muy acostumbrados- ha causado ejecutoria.

Es decir, está firme esta sentencia, ya no cabe impugnación y por consecuencia, no existe de nuestra parte preocupación para, de alguna manera, nosotros venir con nuestra resolución a meternos en el terreno del Poder Judicial o de la posibilidad que el Poder Judicial viniera a establecer una resolución nueva sobre el asunto.

Así las cosas, como yo lo digo y me lo recuerda siempre el Comisionado Guerra, tal situación permite sostener que hoy día, no existe impedimento alguno para que PEMEX Gas y Petroquímica Básica entregue la información solicitada, toda vez que la misma casi en su totalidad es de naturaleza pública –este es el matiz interesante-, sin que se genere detrimento alguno al Sindicato con dar a conocer los montos de recursos que ha recibido. Por supuesto, ¡faltaba más!

En consecuencia, la información solicitada tiene carácter público como lo señaló PEMEX Gas y Petroquímica Básica en su respuesta inicial, por lo que al ser dictada la sentencia del juicio de amparo aludido por la autoridad competente, claro está, y haber causado ejecutoria de la misma, no se desprende algún otro inconveniente que impida publicar la información solicitada.

Así las cosas, nuevamente, la propuesta que les presento a mis compañeros de Pleno es revocar la respuesta emitida por PEMEX Gas y Petroquímica Básica e instruirle que proporcione al recurrente, o sea al solicitante que en su momento le pidió esta información 20 años de trasvases de recursos de PEMEX al Sindicato Nacional de PEMEX en su sección de Tabasco-, que proporcione al recurrente la información

solicitada consistente en la copia en versión electrónica del listado de recursos económicos destinados para la Sección del Sindicato Petrolero del 94 al 2014, desglosado por año y objetivo del recurso entregado, omitiendo única y exclusivamente, lo relativo a las cuotas sindicales de forma individualizada, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que tal información es de naturaleza confidencial, conforme al artículo 18, fracción I de nuestra Ley o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que esperamos que ya los señores legisladores la reformen, le quiten el apodo de gubernamental, que es el último término con el que fue concebida cuando se pensó en su origen, que iba a ser exclusiva para el Ejecutivo.

Pues bueno, la relevancia del asunto que les presento atiende a que las reformas al 6º constitucional, en febrero del año pasado, y la Ley General de Transparencia recién aprobada, pendiente de promulgación conforme a ella, los sindicatos ya no podrán emplear más este tipo de argucias para continuar en este caso o en estos similares, con mantos de opacidad que fue durante años un asunto que ocurría como tal.

Pues ahora los sindicatos deben recordar que, en adelante serán sujetos obligados, ceñidos a la competencia supervisora y resolutoria de este organismo garante, y que desde luego nuestras resoluciones son definitivas e inatacables.

Lo anterior permitirá evitar este tipo de artilugios, proceso de interponer amparo para frenar las cosas y para naturalmente ponerle distancia a la pretensión del solicitante, y con ello, casi, casi empujarlo a abandonar las causas de seguir o de persistir en la búsqueda de la satisfacción a sus reclamos informativos.

Lejos de preservar su derecho, estas actitudes de artilugios, lo pongo en conexión por lo que decía la Comisionada Cano hace rato, sobre el caso otro de Banobras que bien litigan los asuntos, pero con un afán y un ahínco que ojalá lo tuvieran para desempeñar la función ordinaria que deben cumplir y con probidad.

En este caso, que se abstengan los sindicatos en casos similares, este asunto va a servir de precedente, para que no intenten estorbar o dilatar o postergar la entrega de la información, tal como lo hizo ver el Poder Judicial, en este caso, al sobreseer por una parte y negar por la otra, el amparo que únicamente fue usado como una práctica dilatoria.

En lo sucesivo, los sindicatos, como ya lo dijimos, serán sujetos obligados, no podrán presentar el amparo para esta modalidad o en estas modalidades, como sujetos obligados, toda vez que el ejercicio público siempre debe estar sujeto a escrutinio.

Y aquí solamente, desde luego, imagino que los Comisionados harán alguna aportación, alguna intervención, especialmente yo pido a la Comisionada Kurczyn, si es que lo quiere hacer, porque tiene que ver el asunto con los sindicatos.

Pero bueno, es que esa parte del recurso público, globalmente lo que PEMEX le haya dado, le haya entregado al Sindicato Petrolero, por cualquier tipo de causa, razón o motivo, es escrutable, es dinero público y es un monto que en global, en bloque, es un trasbalse que siguiendo la perspectiva de ver, de explicar los asuntos públicos, y llegar a la verdad pública, debe ser explicado.

Otra cosa es la porción de esa masa de recursos que desde luego tienen que ver con la cuestión de las asignaciones individualizadas a los trabajadores por motivo de su pertenencia a este sindicato y por consecuencia, porque ya en esos casos, son parte de un tratamiento particular del derecho laboral y que el derecho constitucional, también desde luego reconoce como asuntos, como partidas que van dirigidas a forma parte de su patrimonio, en la vía de los recursos que vía cuotas, estos entregan al Sindicato o en la vía en la que el dinero público, por alguna razón de los contratos aquí colectivos, lo sabe mejor la Comisionada Kurczyn, pueden ser parte de algunas prestaciones o demás auxilios o apoyos a los sindicalizados.

Yo con esto lo que planteo, para que no se pierda por mi exposición lírica, como siempre humanista, hasta cierto punto se traten de hacer las cosas más sencillas de lo que se puede, aunque estas cosas son delicadísimas y muy graves, es revocar la respuesta; no podemos consentir y menos tras lo expuesto, después que se ha visto cómo el

amparo en este caso fue empleado por el Sindicato para tratar de impedir la respuesta pronta, y presumiendo que la institución, en este caso PEMEX iba a entregar como debería de haberlo hecho en un principio, la información como se la pidieron, desglosada por años y objetivo de cada peso y centavo que se le haya transferido por parte de PEMEX a la sección del Sindicato de PEMEX en Tabasco, del '94 al 2014; con la única excepción de particularizar esa porción que ya dijimos, pudiera ser interpretada y es confidencial en tanto que va destinada a la parte de los trabajadores individualizadamente.

Muchas gracias.

Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Señor Comisionado, ya me hizo usted comprometerme con hacer algún comentario.

Mire, yo no preparé un comentario sobre este tema porque todavía no tenemos una Legislación que nos permita poder señalar de qué manera vamos a poder actuar en ese sentido.

Queda totalmente claro que -como lo señala el Artículo 6º Constitucional- los sindicatos quedan ya determinados como Sujetos Obligados, como lo confirma la Ley General recién aprobada y nos quedará todavía en el camino reglamentar y regular algunos detalles, algunas consideraciones que serán de una gran importancia.

En esto, vale la pena adelantar para los propios sindicatos y para los sindicalizados la advertencia de que no deben de preocuparse en cuanto al tema de la libertad de gestión que tienen, de la libertad de autodeterminación toda vez que la Transparencia y la Rendición de Cuentas que se exige a los sindicatos, que se exigirá de acuerdo a las nuevas Leyes, son solamente respecto de aquellos recursos públicos que les son entregados por cualquier motivo o por cualquier razón.

No estamos hablando del patrimonio que el sindicato integre por sí mismo, no estamos hablando del patrimonio que se integra con las cuotas que pagan los trabajadores puesto que las cuotas que pagan los trabajadores, si bien se hace en la mayor parte de las ocasiones

por conducto del empleador o del patrón -como dice la Ley Federal del Trabajo- ese dinero, una vez que es parte del salario del trabajador, no es dinero público, es dinero de los trabajadores y eso va al patrimonio sindical y quienes pueden y tienen todo el derecho para exigir Rendición de Cuentas respecto del uso de tales cantidades son exclusivamente los sindicalizados y para ello, la propia Ley Federal del Trabajo establece las normas y señala quiénes están obligados para Rendir Cuentas, de qué manera deben de hacerlo y cómo deben de realizarlo, cuáles son los procedimientos para ello.

En esto es muy importante señalar que de ninguna manera se está violando el Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo y que tampoco hay una violación al Artículo 123 Constitucional en la Fracción XVI ni tampoco la hay en lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo cuando se refiere al tema de los sindicatos.

Ahora bien, en tema particular que nos ocupa, me llama la atención el hecho de que se señale que hay un Amparo al que recurrió, que solicitó el propio sindicato porque bueno, desconozco si en el Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato y de Pemex o alguna de las filiales -en ese sentido, de Pemex Gas y Petroquímica Básica- se determine que la empresa, en este caso el empleador o patrón, tenga la obligación de comunicarle al sindicato que tiene que dar una explicación ante una autoridad, en que tenga que rendir un informe.

No lo sé, no tuve la curiosidad de examinar si existe este tipo de obligación en cuanto a que el empleador diga que le da aviso al sindicato como un derecho de audiencia, pues tampoco no me queda muy claro. Pero no soy especialista en temas de constitucionalidad y de amparo.

Y por lo tanto, no podría tampoco pronunciarme de una manera definitiva, pero no quiero dejar de señalar que me causa asombro tal.

Es decir, ¿qué pienso?

Pues pienso que la empresa en el momento en que está requerida de una información, lo que hace es avisarle al sindicato para que él sea quien se proteja con el propósito de no dar la información adecuada en este sentido.

Llama la atención que justamente también en este bloque de recursos que estamos aprobando, que estamos presentando en este Pleno, hay uno relacionado también contra PEMEX en general en cuanto a las habitaciones que se les da como prestación a los trabajadores en Tabasco que hay un recurso, una información que solicita que se diga ¿a cuánto asciende el monto, en qué condiciones se da, si son propiedad, si son en arrendamiento, si son una prestación?

En la cual inclusive llama la atención –según me dijeron en la ponencia- el señalamiento de que inclusive hay, digamos, le llaman “hoteles para solteros”. Es decir, hoteles en los que pueden ir de vacaciones los trabajadores que van solos, que no van con una familia.

Pero eso yo ruego que se considere solamente como un comentario que se me hizo, porque yo no lo pude corroborar.

Pero sí estamos conscientes de que al mismo tiempo que se presenta este recurso coincide con el otro relacionado a las prestaciones, cuánto se da, cuánto se aporta, cuánto cuesta, cómo son habitaciones en Tabasco para el mismo sujeto obligado.

Entonces creo yo que acompaño al señor Comisionado Acuña, en la resolución de revocar hasta qué punto se pueda hacer, en virtud del amparo que existe, porque el sujeto obligado continuara diciendo que no podrá violar una disposición de orden judicial de un Tribunal Supremo para poder dar la información.

Sin embargo, celebramos que este tipo de gastos, este tipo de utilización de recursos puedan ser señalados, se puedan dar informes y esto pues muy pronto con la nueva ley tendríamos los elementos para poder hacer ampliaciones en este sentido y poder dar una cuenta muy importante.

Muchas gracias.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias.

Antes de conceder la palabra a los demás comisionados, hacer una aclaración precisamente.

Ya el juez de amparo, el juez de amparo que fue el juez competente para conocer el amparo que promovió el sindicato en su momento, primero estableció, bueno, dictó, concedió o fijó suspensión provisional, después definitiva y finalmente sobreseyó ese juicio; entonces ya no hay pretexto alguno para que el sindicato pudiera argüir, bueno, el sindicato nada, porque el sindicato en este caso no fue el sujeto obligado al que se requirió la información, sino PEMEX-Gas y Petroquímica Básica.

Pero por otro lado, por supuesto que a lo que yo voy, concuerdo con Patricia Kurczyn, en que de alguna manera qué tendría o qué tenía que haber notificado PEMEX, en este caso Gas y Petroquímica Básica, en esa formalidad así, para que hiciera casi casi así el sindicato, saber lo que a su derecho conviniera; porque finalmente es sobre recurso público. Es decir, PEMEX Gas y Petroquímica Básica debería de tener, eso sí comparto plenamente, debería haber y de inmediato procedió a contestarle al solicitante la información, desde luego excluyendo esa parte que le estamos diciendo aquí, tardíamente, después de ciento y tantos días naturales se llevó por la interposición del amparo, eso es lo que es lamentable.

Debió procedido de inmediato y sin tapujos, sin pendientes, sin el temor de con ello, poder poner en peligro al Sindicato ¿de qué?

Perdón, Patricia Kurczyn quiere hacer otra.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: No, no, perdón es que realmente yo no había dado lectura completa, y aquí lo que acabas de señalar exactamente, que el Juez de la causa sobreseyó el juicio de amparo y por supuesto, pues no hay un amparo ya como tal, y de esa manera no hay ningún pretexto para que el sujeto obligado pueda dar la información que se le requiere por parte de esta autoridad.

Comisionada José Francisco Acuña Llamas: Gracias. La Comisionada Areli Cano.

Comisionada Areli Cano Guadiana: Sí. Bueno, aquí yo quiero hacer dos comentarios.

Ha sido una actitud recurrente de PEMEX, notificar al Sindicato cuando se presenten solicitudes de información, sea cual sea la materia y no es el primer caso, ya hemos resuelto previamente y vienen más recursos sobre ello.

Donde se presenta una solicitud se avisa al Sindicato, el Sindicato se ampara y entonces propicia que los Jueces de la materia por lo menos otorguen suspensiones provisionales, y en muchos casos la suspensión definitiva.

Yo creo que sí es necesario, se está convirtiendo en una práctica no deseable para garantizar derecho, ese es mi consideración. O sea, no es correcto esas prácticas que está haciendo por parte de PEMEX, máxime cuando se está pidiendo información que obra en sus archivos y que mucha de esa información, bueno, todo tiene que ver con recurso público, pero particularmente la materia de solicitud tiene que ver con listado de recursos económicos destinados a la Sección del Sindicato Petrolero en el estado de Tabasco, durante determinados años, desglosado por año y el objetivo del recurso entregado.

Esté en vigor o no la nueva Ley General, esta disposición se tiene que cumplir porque es recurso público, no es esperar a la Ley General ni a cómo será el comportamiento ahora o la relación con los sindicatos.

Yo creo que aquí sí amerita, en algún momento, alguna área del Instituto o nosotros mismos, al momento ha habido ya varios requerimientos, que yo creo que no es la forma o se está convirtiendo en una actitud poco satisfactoria para acceder a accesos de información, por decir lo menos.

En este caso, ah, bueno, sí, ha habido también y ya nos han notificado resoluciones donde sí los Jueces han determinado que el Sindicato es jurídicamente posible, que la institución pueda llamar a terceros interesados y se da la validez que estas personas afiliadas al Sindicato pueden aparecer en un juicio de amparo como terceros interesados. Y dice la resolución o los criterios que nos ha circulado la propia Dirección Jurídica del Instituto, que puede ser desde el momento de la

solicitud, cuando se está substanciando el recurso, o al momento de que se entrega respuesta. O sea, hay tres momentos en los que sí es factible que los afiliados del Sindicato puedan acudir o recurrir, pero es porque yo entiendo que esa información es perteneciente a su persona o que le afecta, pero aquí cuál afectación al Sindicato si es recurso público.

La otra consideración es que, efectivamente, este recurso, dicen: "Bueno, ya se sobreseyó, ya causó ejecutoria y se puede entregar", pero según los antecedentes que nos marca la propia resolución, esta ejecutoria o esta resolución que invoca el sujeto obligado, según los razonamientos, no tienen nada que ver con el tema que nos ocupa o con la solicitud que nos ocupa, se refiere a otra solicitud y eso lo dice en el razonamiento que expresan en el proyecto.

Entonces, yo creo que sí habría que no desatender este tema, creo que sí es un tema que hay que ocuparnos, porque sí se está dando de forma recurrente, que particularmente este sujeto obligado llame al Sindicato para, y yo diría, bueno, ahí en sus alegatos dice que de ninguna manera trata de negar la información, concediendo sin suponer que no se está negando, lo que sí está haciendo es retrasando el ejercicio de un derecho que también es una premisa fundamental para garantizarlo.

Gracias.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Comisionada Patricia.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Perdón, te solicito que me permitas solamente para hacer una pequeña aclaración.

Sí, como dice la Comisionada Cano, en efectivo, no necesitamos esperar a la Ley para que podamos aplicar la Ley de Transparencia.

A lo que yo me refiero es que con la Ley tendremos más elementos, con la nueva Ley General y las nuevas Leyes que vengan, tendremos más elementos para hacer de una forma más directa, la obligación del Sindicato para poder o para que no intervenga en esto o bien para

exigirle al propio Sindicato esa información que ahora se le está pidiendo solamente al empleador.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Perdón, Comisionado Joel Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: Nada más un comentario muy rápidamente en función de un caso similar que tuvimos, en donde a un sindicato se le pidió información sobre las pensiones vitalicias que se habían entregado como parte de un acuerdo con un sujeto obligado, instruimos a que se entregara la lista y el monto de los recursos económicos para cada una de estas personas que integraron a un sindicato, y el sindicato qué hizo, se amparó, aludiendo que no había existido un debido proceso al no haber sido llamado como tercero interesado, que ya lo comentaba la Comisionada Cano, que ha habido resoluciones en donde los jueces fallan a favor del Sindicato, y bueno, en esta notificación que se nos acaba de hacer, el juez determina que no existió afectación al debido proceso en virtud de que no correspondía el derecho a la confidencialidad, porque efectivamente se estaban haciendo uso de recursos públicos.

Entonces, evidentemente esta decisión del juez, posiblemente nuevamente la va a controvertir el Sindicato, pero ahí todavía hay un precedente en el sentido contrario y efectivamente creo que la Ley nos va a dar mucho mayores elementos para definir y que mediante este ejercicio del amparo, no se obstaculice la expedites de este derecho.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Por supuesto.

¿No sé si la Comisionada Cano quería hacer otra precisión?

Comisionada Areli Cano Guadiana: Sí, nada más para abonar a la discusión.

Ya tengo aquí la tesis, es Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto la Ley Federal relativa como su reglamento respetan la garantía de audiencia de los terceros interesados.

Es novena época, instancia Primera Sala y es el Tomo 23, de febrero de 2006.

En esta Tesis se señala que se da el respeto al tercero interesado pero dice: “En primer lugar, en la etapa...”; habla la Tesis de Datos; en primera, del Procedimiento de Acceso a Datos Personales:

“...documentos e información en posesión de los Poderes de la Unión u órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal; los terceros interesados tienen la oportunidad de manifestar lo que a su Derecho convenga respecto de la solicitud de que se trate en diversos momentos; en primer lugar, en la etapa en que se desarrolla ante la Unidad de Enlace de la dependencia u órgano autónomo cuando, por la naturaleza de la Información, el Comité de Acceso considere pertinente recabar la autorización del Titular de la Información previamente a su entrega, otorgándole un plazo de diez días hábiles para contestar.

“En segundo lugar, en el trámite del Recurso de Revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, cuando en el escrito por el que se interponga este medio de defensa, se le señale expresamente como Tercero Interesado o el Instituto oficiosamente le otorgue ese carácter y por ende, la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas en el Recurso, lo que podrá hacerse inclusive de modo propio pues ninguna disposición lo prohíbe.

“Por lo tanto, la Ley en comento y su Reglamento otorgan a Terceros Interesados la Garantía de Audiencia que establece el Artículo 14 Constitucional”.

Totalmente claro, es cuando hay una afectación al Titular de los Datos que se le requiere autorización. En este caso, es recurso público y yo creo que aquí el sindicato sí está teniendo una actitud de retraso para atender Solicitudes de Información que son totalmente claras, accesibles y asequibles para hacer su entrega a los requirentes de información.

Gracias.

Consejero Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias.

Pues con ello, para concluir, reafirmar desde luego lo que mis compañeros han asentado y además han enriquecido.

Desde luego la exposición de este caso -yo lo refiero nuevamente- va a servir como punto de partida para una mejor comprensión de cómo, en qué plazo y los términos en que desde luego tocará a este Instituto la emisión de los Lineamientos para hacer posible la concreción de esa nueva Ley General que ha sido aprobada y que está pendiente de promulgación.

Tenemos seis meses -a partir de ese momento- para nosotros emitir los Lineamientos para precisamente ponerle ahí los cómo y los mejores detalles para articular esa manera en que los sindicatos, como nuevos Sujetos Obligados, junto con otros, con sus peculiaridades y sus propias singularidades, tendrán que cumplir con la Ley.

También afirmar -como bien ya dijeron mis compañeras y quedó claro también por el complemento de Joel, mi compañero Comisionado- que aquí hubo una interpretación que me pareció desde luego absurda, de parte del sindicato, interponiendo sus Amparos que a todas luces sabía o podría imaginar y concebir su Jurídico que iban a resultar un fiasco, que no iban a tener futuro y por ello, creo que con toda razón se convierten en artilugios, en trapacerías, en una interpretación legaloide para con ello conseguir detener el Derecho de Acceso a la Información.

Concuerdo -qué bueno que Areli Cano la traiga a la mesa, aquí al Pleno- con esta cita de la Tesis del Poder Judicial de la Federación en este caso, donde efectivamente se distingue, lo dijimos también cuando exponíamos, la parte que tenga que ver con los dineros de los trabajadores, ya lo explicó también muy bien Patricia, con todos esos elementos que son el patrimonio sindical que pertenece o que está relacionado con lo que los sindicalizados, los afiliados o agremiados aportan o viceversa y que tiene que ver con una relación directa a su patrimonio y esté individualizado no se puede entregar.

Pero lo que está muy mal, y también lo dice Areli, es que PEMEX sistemáticamente cuando tiene que ver en estos asuntos en los que se trata en solicitudes de acceso a la información pública, no de datos personales, que reporte lo que ha dado, no tendría por qué haberle manifestado a PEMEX.

Es decir, lo tendría que haber dado, diciendo eso sí: “Hay una porción de este dinero público que, sin embargo, tuvo un destino para efectos de cuotas o de otros elementos de apoyo a los agremiados”.

Y eso, pues desde luego, es inescrutable en tanto que sí es confidencial.

Pero las cosas es que sirva este asunto para poner en sintonía la nueva era, que este Instituto que tenemos el privilegio de encabezar en conjunto con la paridad de un órgano colegiado, pues nos tocará atisbar y, desde luego, surcar en mares procelosos, porque no será sencillo ir naturalmente asentando en cada caso hacer valer estos derechos concurrentes, el derecho de acceso a la información pública, como es el caso de hoy y su conexión con el derecho a la protección de datos personales.

Así, si no hay más de mis compañeros, yo pediría a la Directora General Bárcena, que en funciones del Coordinador de Acceso a la Información en este Pleno, pues tome la votación.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Conforme a su instrucción, Comisionado Acuña, Comisionada Cano.

Comisionado Areli Cano Guadiana: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos:

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionado Acuña.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Es mi proyecto y, por consecuencia, a favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: De esta manera, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA-0589/15, en el sentido de revocar la respuesta de PEMEX-Gas y Petroquímica Básica.

Es cuanto, comisionado.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias a la Directora General Bárcena.

Pido ahora, solicito ahora a la Comisionada Patricia Kurczyn, que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA-1327/15, interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que somete a consideración de este Pleno.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Directora Rosa María Bárcena, por favor, si nos hace un resumen. Muchas gracias.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Con mucho gusto, comisionada.

El particular solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con los casos de desaparecidos inscritos en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas por cada entidad federativa lo siguiente:

- a) Cuántos de esos casos tienen averiguación previa en curso.

- b) Cuántos de esos casos no tienen averiguación previa en curso, sino solo un acta circunstanciada.
- c) Cuántos de esos casos no tienen ni averiguación previa en curso, ni acta circunstanciada.

En respuesta el sujeto obligado por conducto del Centro Nacional de Información, manifestó que la base de datos con que cuenta está integrada por la información que parte de la clasificación establecida en el Artículo 4°, fracción IV, de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, misma que no establece el dato según lo solicita el peticionario.

Motivo por el cual su comité de Información declaró la inexistencia de lo solicitado y orientó al particular a presentar su solicitud ante las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas por ser las instituciones encargadas de recabar lo requerido.

En su recurso, el particular impugnó la inexistencia de la información requerida.

En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial.

De la normativa analizada en la resolución se advirtió que la unidad administrativa idónea para conocer del requerimiento del ahora recurrente es el Centro Nacional de Información. Adicionalmente, de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se desprende que toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional en la forma que establezca el Reglamento de la citada Ley.

En esa tesitura, respecto a las comunicaciones que se envíen al Registro Nacional se establece que deberán contener, entre otros, los datos de la autoridad administrativa o judicial que comunica la denuncia o el reporte de localización, así como el número de expediente o averiguación previa, en su caso, e informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir a ampliar la información del Registro Nacional.

Bajo esa lógica, en la resolución se señala que los datos solicitados por el particular, forman parte de las comunicaciones que se envían al Registro Nacional de Datos de personas extraviadas o desaparecidas, no obstante que tales datos no son publicados en el mismo.

De este modo, el sujeto obligado omitió pronunciarse respecto de los comunicados que recibe por parte de la autoridad administrativa o judicial en los que deben contenerse los datos referentes al número de expediente o averiguación previa en su caso, así como informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir a ampliar la información del Registro Nacional.

Bajo ese tenor, en la resolución se concluye que el sujeto obligado a través del Centro Nacional de Información realizó una búsqueda restrictiva de la información solicitada.

Por lo tanto, la Comisionada Kurczyn propone a este Pleno, modificar la respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e instruirle a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada por el particular en todas las unidades administrativas competentes, sin omitir al Centro Nacional de Información.

Es cuanto, Comisionada.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: Muchas gracias, le agradezco mucho Directora Bárcena.

Miren, no cabe duda, compañera y compañeros Comisionados, no cabe duda que el Estado Mexicano tiene serios compromisos por cumplir en materia de Seguridad Pública y alabo que se busquen políticas públicas y los medios legales para ello, para combatirlo, para cumplir con ese compromiso.

Sin embargo, se tiene conciencia de que se carga con un historial de ilicitud, de proporciones descomunales en temas de seguridad pública.

Ya no vale la pena saber si la mala administración estatal, la administración del estado es de un color o es de otro, pues lo que

importa soberanamente es el sentimiento de los mexicanos tan lastimados y sin resarcir.

Human Rights Watch, en enero de 2014 presentó el siguiente reporte:

Al asumir en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la guerra contra el narcotráfico iniciada por su predecesor había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

A comienzos de 2013, el Gobierno indicó que más de 26 mil personas, habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007; un problema que calificó como una grave crisis humanitaria y promulgó una Ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.

No obstante, el gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada; incluso durante la Presidencia del propio Peña Nieto.

El sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos, y se asegura así su impunidad.

Las disposiciones sobre arraigo, permiten que algunas personas presuntamente implicadas en delitos penales, sean detenidas durante períodos de 80 días, sin ser consignadas.

Continúo leyendo textualmente.

Desapariciones. Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde que el ex Presidente Calderón diera inicio a la guerra contra el narcotráfico.

Integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad, continúan perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas.

En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó que estaba investigando 2 mil 443 desapariciones, en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del Estado.

Es común que policías y agentes del Ministerio Público, no adopten medidas básicas de investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los responsables de su desaparición.

Y frecuentemente se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos.

En algunas ocasiones los familiares de las personas desaparecidas, pueden perder el acceso a beneficios sociales básicos que dependen de la condición laboral de las víctimas como servicios de cuidado infantil.

En febrero de 2013, el Gobierno de Peña Nieto reconoció que más de 26 mil personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde diciembre de 2006.

En mayo, el gobierno creó en el ámbito de la Procuraduría General de la República, una unidad dedicada a investigar desapariciones, si bien, al momento de la redacción de este Informe, enero 2014, no había demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales, o la búsqueda de víctimas.

México todavía no cuenta con una base de datos nacional, sobre los miles de restos humanos no identificados que han sido hallados muchos de ellos en fosas comunes.

Me refiero ahora en concreto a la solicitud de información que se nos presenta, por un recurso ante la ausencia de respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a las múltiples desapariciones de personas mexicanas y extranjeras, que hemos testimoniado o que testimoniamos en estas generaciones o en esta generación.

Queda claro que hay esfuerzos, que los ha habido, pero igualmente se advierte la insuficiencia para dar respuesta satisfactoria que merece el respeto a los derechos humanos, y en este caso, la respuesta que exigen, quienes han perdido algún ser querido, algún familiar o amigo o simplemente un conocido, el empleado, el jefe, el vecino, el cliente, etcétera.

Hace más de 20 años se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hoy también un órgano constitucionalmente autónomo, como respuesta al reclamo que la sociedad hacía frente a las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos de que eran y fueron víctimas miles de personas en los distintos rubros.

Sin embargo, dentro de la relevancia de los Derechos Humanos, puede destacarse el de la Vida, es incuestionable el nivel que tiene; es decir, no hay la supuesta muerte ante la desaparición de una persona, a lo que se tiene que agregar el sentimiento de la incertidumbre y todo lo que ello significa.

El tema del asunto que nos ocupa se relaciona con los Casos de Desaparecidos inscritos en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de los cuales el solicitante requirió conocer cuántos de éstos tienen Averiguaciones Previas en curso, los que solo tienen un Acta Circunstanciada y aquellos en los que no se tiene ni Averiguación Previa en curso ni Acta Circunstanciada.

Ante esta cuestión, el Sujeto Obligado declaró la inexistencia de dicha información; sin embargo, del análisis realizado fue posible advertir la existencia de comunicaciones enviadas al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas por parte de autoridades administrativas o judiciales que tienen conocimiento oficial de la desaparición de una persona, documento que debe contener el número de expediente o Averiguación Previa, en su caso, así como informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir a ampliar la información del Registro Nacional.

Derivado de lo anterior, se determinó modificar la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado toda vez que existen elementos suficientes para concluir que contrario a lo que manifestó, la información solicitada sí obra en los archivos y aquí el paréntesis

sobre la importancia que, desde luego, mi compañero Francisco Acuña relata y revela siempre mucho la importancia que tienen los archivos y de que la gestión documental tenga también una seguridad y una certeza.

Entonces, la información solicitada sí obra en los Archivos del Centro Nacional de Información, Unidad Administrativa encargada de la integración física del Registro Nacional referido.

En consecuencia, se le instruye al Sujeto Obligado para que realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida por el particular en todas sus Unidades Administrativas competentes en las que no deberá omitir al Centro Nacional de Información.

Ahora bien, si una desaparición debe tener nuestra completa atención sin cortapisas, el asunto y su relevancia se multiplica potencialmente cuando ese número de personas es significativo, como lamentablemente se da en nuestro territorio.

Lo que se expresa se fundamenta en Datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en los que se advierte que hasta el 28 de febrero de 2015 había un total de 25 mil 821 personas No Localizadas.

Según Registro de Averiguaciones Previas del Fuero Federal, de éstas, 528 no han sido localizadas y de estas 528, 175 ocurrieron en el Estado de Guerrero.

Ahora, de las No Localizadas del Fuero Común, 25 mil 293 personas no han sido localizadas, de las cuales cinco mil 392 han ocurrido o se han dado en el Estado de Tamaulipas.

Asimismo, es importante señalar que el pasado mes de febrero el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas evaluó en la Ciudad de Ginebra, Suiza, el grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia por parte del Estado Mexicano, dando a conocer sus recomendaciones entre las que exhortó a probar a la mayor brevedad posible una Ley General que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada, en particular aquellos relativos a las prevención, investigación,

juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas.

En armonía con lo anterior, cabe señalar que de acuerdo al Índice Global de Impunidad de 2015, estudio realizado por la Universidad de las Américas, de Puebla, de 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, México se ubica en el segundo lugar en nivel de impunidad, sólo por debajo de Filipinas.

Bajo ese contexto, en dicho estudio se advierte el problema de impunidad que vive México y que en virtud de ello nuestro país tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender.

A saber la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

En este Informe Mundial de Human Rights Watch que acabo de señalar, se señala que en junio de 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como ya lo había dicho, reporta dos mil 443 desapariciones.

Por su parte, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública de 2014, que realiza o que realizó el INEGI, se evidencia que la mayoría de los delitos no se investiga en México. Lo cual es verdaderamente inaceptable.

De acuerdo con dicha encuesta, en el 2013 se cometió un total de 33.1 millones de delitos, de los cuales apenas el 6.2 por ciento terminó en una averiguación previa, lo que significa que 31 millones de ilícitos no han sido investigados o no fueron investigaos.

Por lo expuesto, es necesario hacer conciencia de la importancia de este problema que trasciende las fronteras, como trasciende los valores.

Resulta necesario que se informe cuántos de los casos que se tienen registrados de desaparecidos en el registro de referencia tienen averiguaciones previas o, en su caso, acta circunstanciada o bien si no se tiene averiguación previa en curso, ni acta circunstanciada, debe también comunicarse, ya que esto contribuye a la rendición de cuentas

por parte del estado y a la vez permite evaluar el papel de éste frente a esta problemática.

Ya que no sólo es un tema que interesa a las personas que tienen vínculos con las víctimas, sino a la sociedad en general la cual requiere saber qué papel desempeña el estado en la investigación de tales hechos y qué es lo que se hace en pro de la seguridad pública de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de los integrantes de la población mexicana y de todos aquellos que transiten o residan en la misma.

Finalmente es importante destacar que la impunidad es origen y destino de grandes problemas sociales como la inseguridad, la injusticia, la violencia y la corrupción.

Es por ello que resulta de vital importancia asegurar la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que se articule al Sistema Nacional de Transparencia, y parece ser que todo va encaminado hacia ello, lo cual por supuesto, lo hemos de celebrar, y lo hemos de celebrar más una vez que esté en vigor y una vez que podamos trabajar articuladamente con el mismo Sistema Nacional Anticorrupción.

Igualmente resulta necesario que las acciones de Gobierno Abierto se conviertan en auténticas prácticas transversales y generales, más allá del Plan de Acción 2015, al que México se comprometió en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Por eso, ante esta problemática como otras que aquejan a la sociedad mexicana, este Instituto que se considera la casa de la transparencia, el canal de la rendición de cuentas y el observador de la verdad, aplaude que se conforme un Sistema legal cuyo operativo sea exitoso para terminar con la corrupción en todos los niveles y que ante la apertura del Gobierno, también en todos los niveles, se contribuya a la paz y a la seguridad pública en el orden de satisfacer a los mexicanos y a quienes residan o transiten en nuestro territorio, la seguridad de que sus derechos humanos son y serán respetados, cuidados y vigilados, y que ante la desafortunada violación a los mismos, el Estado garantizará por todos los medios el acceso a la justicia y con ello, el resarcimiento del daño y la sanción a quienes resulten responsables.

Eso es todo.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña

Llamas: Muchas gracias, por esa, hay que decirlo, ejemplar exposición como las que ha habido en esta sesión de Pleno, con tanta información, con tanta referencia estadística y pues hay que decirlo, lamentablemente, con tanta evidencia de muy malas referencias sobre nuestra democracia, así las cosas.

Abrimos la sesión para los comentarios, el compañero Joel Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: Yo tengo poco que añadir a esta extraordinaria exposición que ya nos hizo la Comisionada Kurczyn, un poco ya que es el último recurso que veremos en este Pleno, tratar de cerrar la pinza entre el primero que discutíamos y este último con una metáfora que ayer justo con la Comisionada Cano comentábamos en un espacio informativo, que más que opiniones encontradas en el sentido de contraposición, fueron opiniones encontradas en el sentido de convergencia.

Y es que al escuchar a la Comisionada Kurczyn y cómo ponía este énfasis en el problema de la impunidad; sin duda la impunidad y la corrupción, no sé si se esté permitido aludir en este Pleno a un literato del siglo XIX, extraordinario, como lo fue Bodeller, pero bueno, sin dudas estas dos son nuestras flores del mal.

Y en ese sentido, en cumplimiento de lo que decía la Comisionada Kurczyn, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto y lo hemos dicho muchas ocasiones en este Pleno, la base de datos de personas desaparecidas que es el compromiso número 5, no tenía cumplimiento.

Afortunadamente hoy ya presenta cumplimiento, no sé si es por un cambio que se generó en la PGR y hay una actitud distinta, pero bueno, ya hay cierto grado de avance en ese sentido.

¿Pero cuál es el tema de fondo? Y como bien lo comentaba la Comisionada Kurczyn, ahorita ya no pude entrar al registro directamente para ver si estaba lo de averiguación previa, porque lo

lamentable es que el Secretariado no haya remitido al vínculo de la alianza para el gobierno abierto, en donde estaría la información y quizás si no tiene la averiguación previa, pero por lo que entiendo debe de estar, ahí hay como una cuestión medio inentendible.

¿Pero cuál es el tema de fondo? Que a este día todavía no se ha publicado el reglamento de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Y en cumplimiento a lo que señalaba la Comisionada Kurczyn, sí recordar que a raíz de los hechos de Ayotzinapa, en febrero de 2015, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, se pronunció por avanzar en el fortalecimiento del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con la finalidad de que se pudiesen tener criterios claros, homologados y públicos sobre la forma en que califican las denuncias de desaparición, la investigación que llevan a cabo y la manera en que reportan los casos.

Esa información es sumamente sensible, cada vez hay una mayor afortunadamente en términos de exigencia, desafortunadamente porque prevalecen estos actos de que en cualquier estado de derecho y en cualquier estado democrático, serían excepciones; pero por desgracia, siguen ahora sí que in creciendo, por lo cual creo que el haber puesto y haber presentado este caso en el Pleno, pues permite dar cierta visibilidad a una problemática que por desgracia y como bien se afirmaba en la referencia al informe de Human Rights Watch, es algo que se mantiene como una constante.

Entonces, desde luego voy con el proyecto y celebro el que se nos haya presentado aquí como uno de los casos a discutir en el Pleno.

Comisionado Presidente en funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias, Comisionado Salas.

Comisionada Areli Cano.

Comisionada Areli Cano Guadiana: Muy breve, totalmente de acuerdo con la exposición y aparte con los datos que ilustran y contextualizan el recurso de información.

Yo creo que no se ha logrado el objetivo muy preciso y ha habido avances que yo creo que sí los ha tenido el Gobierno para tener cifras certeras y establecer mecanismos de política pública, que atemperen esta lamentable situación.

Sí creo que estas instancias de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su fin principal era tener trabajos coordinados con los tres niveles de gobierno, porque yo creo que no es un asunto que solamente involucre al propio Gobierno Federal, sino que debe de haber una coordinación.

Y donde se han localizado rezagos importantes, precisamente es en la coordinación operativa de estos niveles de gobierno.

La Comisionada Kurczyn trae a colación varios datos donde la preocupación ya está fuera del núcleo familiar, o sea, esto accede el núcleo familiar y la preocupación que se tiene porque ya es una preocupación colectiva de que no se tenga del todo certeza de las cifras que tienen este tipo de Casos de Desaparición; dicen “desapariciones” y algunas son desapariciones forzadas que tienen todavía un ingrediente adicional porque una tercer dimensión es que se han encontrado personas que ni siquiera se ha podido identificar.

Entonces es bien lamentable este tipo de circunstancias porque hay diversos niveles de desaparición y muchas de estas personas se han encontrado, muchas no se han encontrado y luego, en las que se han encontrado se han advertido serias señales de tortura, por ejemplo.

Entonces sí creo que es un tema que ya se ha convertido como de interés público y social, ante el que creo que es relevante que estas instancias de Seguridad Nacional estén totalmente coordinadas.

Trae a colación cifras de la Administración anterior y ahora de la actual, donde creo que sí hay esfuerzos pero han sido insuficientes para tener una base de datos confiable, que es algo que está dentro de los compromisos precisamente del Gobierno Abierto.

El Comisionado Salas lo tiene bastante claro en cuanto a su numeral muy específico pero sí está dentro de la política de poner orden en la administración de estos temas en la parte de Gobierno Abierto.

Felicito a la Comisionada por su Recurso.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias.

Como colofón -ya lo anticipó Joel Salas Suárez- es conmovedora la exposición, dramática las cifras; ahora me acerqué y a voz baja le preguntaba a Patricia la precisión de los millones y millones, de esa cifra a la que se le puede decir “el hoyo negro” de la justicia porque así como hay un mercado informal, existe desgraciadamente también una pavorosa cifra negra de la que se habla siempre, en torno a los ilícitos que se cometen, que en cualquier país o en cualquier contexto -y en uno democrático- siempre puede tener naturalmente algún tipo de dosis de imprecisión o de desconocimiento del problema.

Es cuando acá la regla es el desconocimiento y peor aún es cuando en la otra regla -que es lo más grave y ella lo dijo con claridad- hay una cifra enorme de delitos que por supuesto fueron denunciados o la autoridad supo de ellos o los identificó, sobre los cuales una ínfima proporción que no alcanza ni el 10 por ciento tuvieron alguna suerte en camino de juicio, en barandilla de la justicia, camino de procesamiento y luego se borró el camino porque quedaron en eso, en el olvido, en la indiferencia.

Y claro, todos ellos o muchos de ellos seguramente -como ya decía también Patricia- son esas cuentas tremendas de número de Averiguaciones Previas o de otras promociones procesales o actividades de los Ministerios Públicos, después de los Juzgados en las que se quedan pasmados los mecanismos de la procuración de la Justicia y luego de la intervención judicial y que naturalmente solo hacen que nos reflejen como una nación aquejada de un serio problema que es el desamparo, paradójicamente cuando el nombre del Amparo, esa figura proverbial de la que hablaba Burgoa, planteada desde luego por Crescencio Rejón y nunca es, desde luego, en un Pleno, como que el remedio.

Se planteaba cuando Burgoa hacia esas alocuciones tan célebres, en las que decía que: “El amparo había venido a nacer para precisamente colmar las posibles deficiencias ocasionales o excepcionales que

podría tener la maquinaria de la justicia ordinaria y/o la actuación de autoridad ordinaria en atropello de los derechos fundamentales de la población”. Y en este caso, especialmente respecto de los flagelos que más la cincelan y más la afligen y mortifican y además, bueno, ultrajan.

Pero nunca se da en ningún Pleno y menos en un Pleno de una sociedad democrática no recibida, con respeto, las citas a los grandes poetas y a los grandes intelectuales de todas las épocas y, por supuesto, Kebo Deller es uno de ellos. Así que yo celebro que evocando Las Flores del Mal, aunque desgraciadamente, claro, para esa cita pues casi casi nos aprestemos a declarar, si no hay más intervenciones, una más de Joel Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: Muy breve, en función de su comentario, Presidente y de la Comisionada Cano, el suyo en relación a estas violaciones o este detrimento a los derechos humanos y en relación a lo que señalaba la Comisionada Cano, de conocer con exactitud cuántas de esas desapariciones pudieron ser desapariciones forzadas y que en el seno de la Alianza para el Gobierno Abierto también post-crisis Ayotzinapa, hubo un giro que desde la sociedad civil se le pretendió dar a la Alianza para meterse más a temas desde un enfoque de derechos humanos, muy rápidamente comentar de un ejercicio que a petición del Artículo 19 se nos hizo al Pleno, de poder trabajar un micrositio en donde esté toda la información relativa, de manera proactiva a las graves violaciones de derechos humanos y que pueda tener consistencia, consonancia y dados algunos problemas a los cuales tanto el sector académico, como la propia ciudadanía se ha enfrentado últimamente para obtener información histórica en relación a lamentables sucesos como los que hemos venido también discutido en este Pleno, 68 o 71 o la guerra sucia, pues el Instituto consciente de que es un tema sumamente sensible y que se requiere de información, está trabajando de la mano con la organización de la sociedad civil del Artículo 19, en la construcción de un portal en donde de manera proactiva se podrá conocer los casos por desgracia más relevantes en materia de violaciones graves a los derechos humanos y que esperemos pronto pueda haber la luz pública.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias.

No hay más comentarios de mis compañeros comisionados, solicitamos así a la Directora General Bárcena que tome la votación.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Sí, comisionado.

Comisionado Areli Cano Guadiana:

Comisionado Areli Cano Guadiana: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionada Kurczyn.

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionado Salas.

Comisionado Joel Salas Suárez: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Comisionado Acuña.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: A favor.

Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información Rosa María Bárcena Sánchez: Se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA-1327/15, en el sentido de modificar la respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es cuanto, comisionado.

Comisionado Presidente en Funciones Francisco Javier Acuña Llamas: Muchas gracias.

No habiendo más asuntos que tratar y antes de ello agradeciendo la oportunidad de mis compañeros de Pleno, de conducir el turno de la

palabra y la exposición de los asuntos en esta sesión, en ausencia de la Comisionada Presidenta, Ximena Puente de la Mora y de los comisionados Oscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey, que se encuentran precisamente representando a nuestra institución en la renovación del mandato de la Red de Transparencia en el Cono Sur.

Así las cosas, pues procedo con su venia, a declarar concluida la Sesión del Pleno de hoy 22 de abril de 2015, siendo las 13 horas con 30 minutos.

Muchísimas gracias a todos.

---oo0oo---